

BOLETIN N° 855-03

INFORME DE LA COMISION DE ECONOMIA recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Cooperativas.

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Economía tiene el honor de informaros el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Cooperativas.

En relación con esta iniciativa de ley, vuestra Comisión escuchó los planteamientos del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, don Jorge Leiva, del Subsecretario de dicha Cartera de Estado, don Luis Sánchez, y del Jefe del Departamento de Cooperativas del referido Ministerio, don Carlos Rubio.

Concurrieron, asimismo, especialmente invitados, don Gerardo Ramírez, Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Luzagro Ltda.; don Jorge Leiva, don Héctor Rubio y doña Soledad Leiva, Presidente, Vicepresidente y Secretaria de la Confederación General de Cooperativas de Chile, CONFECOOP Chile Ltda.; don Andrés Corral, Asesor Jurídico de Cooperativa Agrícola Control Pisquero de Elqui y Limarí Ltda.; don Francisco Peñafiel, Gerente General de Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Ltda. Capel; don Nicomedes Campos, don Eduardo Anriquez, don Alfredo Hess y don Gonzalo Vial, Presidente, Gerente General y asesores jurídicos de la Federación Nacional de Cooperativas Agrícolas Lecheras de Chile; doña Siria Jéldes y don Claudio Ramírez, Gerente General y Gerente Comercial de la Cooperativa del Personal de la Universidad de Chile, Copeuch Ltda.; don Francisco León y don Juan Martínez, Vicepresidente y Asesor de la Confederación Nacional de Cooperativas Campesinas; don Lautaro Cisternas y don Nelson Cofré, Presidente y asesor jurídico de la Federación Chilena de Cooperativas de Ahorro y Crédito Ltda.; don Emilio Segel, Vicepresidente de la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas Ltda.; don Benigno Alvarado y don Mario Vargas, Vicepresidente y Consejero de la Federación de Cooperativas de Consumo de Chile Ltda., y don Ramón Santelices, representante de las Cooperativas Abiertas de Vivienda.

- - -

Cabe dejar constancia de que los artículos 65, 77 y 133, contenidos en los numerales 67, 81 y 144, respectivamente, del artículo 1º, son materia de ley orgánica

constitucional y requieren para su aprobación de quórum especial, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución Política de la República.

- - -

Es dable señalar, asimismo, que a través de oficio N° 14.051, de fecha 7 de abril de 1999, se consultó a la Excm. Corte Suprema en relación con el proyecto en informe, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 74 de la Carta Fundamental, constando la respuesta del Máximo Tribunal en el oficio N° 453, de fecha 3 de mayo de 1999.

OBJETIVOS FUNDAMENTALES Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Los principales objetivos de la iniciativa en informe consisten en estimular las iniciativas personales y grupales y el desarrollo de las potencialidades de la población interesada en organizarse en cooperativas; modificar los procedimientos para la constitución, reforma de estatutos y disolución de las cooperativas a las fórmulas generales, que con ciertas similitudes se aplican en la actualidad a otras personas jurídicas; tender a la eliminación de disposiciones entrabantes o limitantes, dejando que la aplicación de los principios cooperativos sea llevada a la práctica por los socios de las entidades conforme a la realidad específica de cada organización, y concentrar en la Ley General de Cooperativas toda la legislación dispersa en diversos cuerpos normativos.

El proyecto consta de dos artículos permanentes, el primero de los cuales contiene 151 numerales.

- - -

ANTECEDENTES

Para una adecuada comprensión de la iniciativa en informe deben tenerse presentes los siguientes antecedentes:

A.- ANTECEDENTES JURÍDICOS

Es dable mencionar aquí, entre otras, las siguientes disposiciones legales: Ley General de Cooperativas, cuyo texto refundido se contiene en el decreto supremo N° 502, de 1978, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Decreto Ley N° 1.320, de 1976, sobre cooperativas de vivienda; Ley N° 19.019, que modifica el D.L. N° 1.320; Decreto con Fuerza de Ley N° 12, de 1968, que establece normas sobre constitución, funcionamiento y administración de cooperativas de reforma agraria;

Decreto con Fuerza de Ley N° 13, de 1968, sobre cooperativas campesinas; Ley N° 4.531, sobre cooperativas agrícolas; Ley N° 18.023, que establece obligaciones para las sociedades de cooperación agrícola; Decreto Supremo N° 497, de 1967, del Ministerio de Economía, que aprueba el Reglamento de Cooperativas de Productores de la Pequeña Minería, y Decreto Supremo N° 250, que aprueba el Reglamento definitivo para el funcionamiento de las Cooperativas Vitivinícolas.

B.- ANTECEDENTES DE HECHO

Mensaje de S.E. el Presidente de la República

Dicho documento señala que el desarrollo económico con equidad requiere generar condiciones para que todos los sectores puedan efectuar y potenciar su aporte al desarrollo social y económico, así como generar aquellas condiciones que permitan una cada vez más amplia participación de la población en los beneficios que surgen de este proceso.

Indica, asimismo, que la experiencia chilena de los últimos cuarenta años, así como la de muchos de los países desarrollados durante el presente siglo, muestra que el sector cooperativo puede combinar adecuadamente ambos aspectos, en términos de convertirse en un agente, entre otros, para dotar a la sociedad de una mayor igualdad de oportunidades.

Sin embargo, continúa expresando el Primer Mandatario, el cooperativismo chileno se ha retrasado en alcanzar los niveles de modernidad necesarios para efectuar una mayor contribución al desarrollo nacional, servir de vehículo para participar en los beneficios del mismo y adecuarse a las exigencias del medio actual, que tiene características muy distintas al contexto en que surgió el sector cooperativo en Chile.

Explica que como consecuencia de la estrategia de desarrollo seguida por el país desde los años cincuenta y hasta mediados de los sesenta, el cooperativismo se desarrolla en Chile principalmente bajo el alero de la acción estatal, sin olvidar el aporte de la Iglesia Católica y de otros precursores individuales e institucionales. Se estructura un importante tejido de organismos públicos y privados que destinaron notables esfuerzos de apoyo al sector. Se crea, además, un marco jurídico protector que privilegia a las cooperativas en sí mismas por sobre su eficaz y plena incorporación a las relaciones con el medio. Se fomenta la actividad cooperativa en sectores sociales deprimidos, zonas territoriales o actividades económicas que no eran atendidas o lo eran sólo regularmente por la acción del Estado, o que no representaban interés para la acción del sector privado.

Apunta que los cambios ocurridos en el país durante las últimas dos décadas, en relación con el rol del Estado en la sociedad, así como en cuanto a las características específicas de ésta, y en general, la mutación en la estrategia de desarrollo seguida por el país, hacen hoy día imprescindible restablecer las condiciones mínimas para su desarrollo, en función de los intereses de la comunidad, sobre bases distintas.

Expresa que las cooperativas constituyen una de las formas asociativas que puede asumir la titularidad de una empresa y que tiene características especiales. Por una parte, se confunden en ella las categorías o factores que participan en la empresa, es decir, son los socios de las cooperativas quienes por lo general aportan el capital, incorporan o contratan la capacidad empresarial, adquieren los bienes o servicios que la empresa produce y en muchos casos, hacen acopio de los insumos y materias primas requeridas o aportan, incluso, el trabajo.

Por otra parte, observa, le es propio a esta forma de organización un marco doctrinario, de principios, que en el texto del proyecto se positiviza en su artículo 1º, a modo de características esenciales de las cooperativas. Desde esta perspectiva, acota, son empresas de carácter democrático, con potencialidades para amalgamar adecuadamente sus especificidades propias, con una capacidad empresarial acorde con los tiempos, cada vez más exigentes.

El proyecto de ley busca generar un marco jurídico moderno, que:

- 1.- Estimule las iniciativas y el desarrollo de las potencialidades propias de la población interesada en participar u organizarse bajo la fórmula cooperativa;
- 2.- No contenga disposiciones que traben al funcionamiento de las cooperativas, dejando que la práctica y la aplicación de las características esenciales de ellas, vale decir sus principios, sean regulados por los estatutos y acuerdos internos de cada organización, conforma a sus procedimientos democráticos y a su realidad y funciones propias, y
- 3.- Reconozca adecuadamente el objetivo económico, que también es consustancial a estas instituciones, a fin de que puedan aprovechar sin mayores limitaciones las oportunidades que el sistema económico pueda ofrecerles y los estímulos de este carácter, factor esencial para el desarrollo de la empresa, de la cual la cooperativa es su titular.

Señala que desde un punto de vista más formal, el proyecto pretende refundir en un solo texto toda la legislación cooperativa dispersa en diversos textos de rango legal.

Precisa que en torno a los objetivos mencionados se proponen sustanciales reformas al procedimiento establecido para la obtención de la personalidad jurídica, la reforma de los estatutos o la disolución de las cooperativas, de manera que en reemplazo del sistema de concesión, actualmente existente, en cuya virtud se requiere la dictación de un decreto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción para que los actos sean reconocidos por el ordenamiento jurídico, se sugiere un sistema de registro, con medidas de publicidad adecuadas, correspondiendo en general la evaluación de la viabilidad del proyecto cooperativo a los propios interesados.

Explica que se propone, del mismo modo, que el tipo jurídico "cooperativa" sea genérico o universal, de modo tal que pueda ser titular de cualquier tipo de empresa o actuar en cualquiera actividad económica, salvo las limitaciones que impone la ley. Agrega que, desde luego, aquellas cooperativas que actúen en actividades económicas regidas por leyes especiales o sometidas a una fiscalización especial deberán someterse a las normas que regulan el desempeño en dicha actividad y al organismo fiscalizador que las aplica, en los aspectos propios del giro.

Destaca que en materia de principios el proyecto pretende mantener aquellos que tradicionalmente han caracterizado a estas empresas, pero que, no obstante, en una visión actual, es menester dejar espacio para que sean puestos en práctica por la vía estatutaria y de los acuerdos de las instancias internas democráticamente generadas, acorde con la realidad específica de cada organización, de las funciones que desarrolla y de los intereses de quienes las integran. De este modo, materias tales como la distribución de los remanentes y excedentes, la remuneración de los factores, y en general, la adquisición, el ejercicio y la pérdida de la calidad de socio y las prestaciones a que haya lugar por estas causas, las determinarán los propios socios en conformidad a las características esenciales de estas instituciones.

Indica que acorde con la concepción enunciada se pretende eliminar las trabas para que las cooperativas puedan brindar sus bienes y servicios a personas que no ostentan la calidad de socios, salvo excepciones, y se posibilita la asociación de cooperativas con entidades de distinto tipo, en función de sus propios intereses, estableciéndose normas tendientes a dar adecuada transparencia a este tipo de operaciones, de modo que sus socios puedan percibirlas y conocer sus resultados.

S. E. el Presidente de la República manifiesta que considerando la importancia que se atribuye al volumen de operación y recursos que pueden llegar a tener o administrar las cooperativas, y el necesario resguardo del bien común, el proyecto propone, además, dotar al Departamento de Cooperativas de la Subsecretaría de Economía del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de facultades adecuadas a una correcta y oportuna fiscalización.

DISCUSIÓN

Vuestra Comisión tuvo presentes las opiniones relativas a la iniciativa en informe vertidas por representantes del Ejecutivo y del sector privado, que se resumen, en lo fundamental, a continuación:

El señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción destacó la gran importancia que tiene el proyecto en informe, señalando que tiene gran relevancia legislar en las materias a que se refiere el proyecto, dado que existe una ley que rige desde el año 1963, y el contexto en que en la actualidad tienen que desenvolverse las cooperativas difiere mucho del de esa época.

Expresó que el origen de la iniciativa se encuentra en un intento de poner al día la legislación que rige la materia.

Informó que estudios estadísticos del quinquenio 1991-1996 revelan que si bien el número de cooperativas disminuyó de 1.231 a 1.060, el número de socios aumentó de 580.000 a 760.000, lo que significa un aumento de un 40% en cinco años.

Las cifras demuestran por tanto, precisó, que el sector es fuertemente dinámico y que en sectores como en vivienda, por ejemplo, tiene gran importancia.

Hizo notar que el proyecto de ley en informe, aunque no tenga la urgencia legislativa que tienen otras iniciativas llamadas a resolver conflictos inmediatos, reviste para el Ejecutivo trascendencia por los avances que conlleva.

Resumió los objetivos fundamentales en los puntos que se indican a continuación:

a) Modificar lo referente a la forma de constituir, registrar y disolver las cooperativas. Explicó que en la ley vigente se exige un decreto que el Ministro de Economía dicta en virtud de la delegación de facultades del Presidente de la República, haciendo notar que no corresponde que una sociedad entre privados requiera aprobación del Estado para poder constituirse, registrarse o disolverse.

b) Introducir enmiendas respecto de la forma de funcionamiento, porque la ley vigente es muy estricta en cuanto a la forma en que deben cumplirse los objetivos y principios del sistema cooperativo, mientras la iniciativa en informe deja más libertad para que los propios socios, en los estatutos, interpreten esos principios y fijen las formas concretas en que los principios cooperativos se van a aplicar, resaltando que ello tiene especial relevancia en torno a la forma de distribución de excedentes y en las relaciones con terceros, que en una sociedad dinámica, con mercado abierto, como es el que existe en la actualidad, para permitir la interacción libre con los distintos agentes económicos.

c) Cambios en lo relativo a la dirección y gestión de las cooperativas. Por un lado se plantea una mayor exigencia en cuanto a la participación de los socios, restringiendo las delegaciones de poderes, otorgando, por otro lado, mayor flexibilidad a los órganos de gobierno, lo que permite más libertad para contratar personal especializado que pueda participar en ellos, esto es, que no quede limitado exclusivamente a los socios la posibilidad de formar parte de los organismos superiores de administración de las cooperativas.

d) Respecto de la resolución de conflictos internos, se propone un procedimiento judicial para hacer más ágil y expedita la resolución.

e) En lo referente a la supervisión y fiscalización, se trata de dotar al ente fiscalizador, que por ahora sigue siendo el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, de facultades parecidas a las de las Superintendencias, de manera de

asimilarlo a la forma de actuar de éstas, que tienen una legislación más moderna y adaptada al tipo de transacciones y negocios que son frecuentes en la actualidad.

Finalmente, hizo notar que si bien se introducen enmiendas en otros aspectos, ellas consisten básicamente en adaptaciones, mencionando a modo ejemplar algunas disposiciones tributarias que se trata de conciliar con las actualmente vigentes, y la participación en sociedades, punto en el cual hoy en día las cooperativas tienen fuertes restricciones.

Concluyó destacando que el proyecto aspira en esencia a la modernización de la legislación para adecuarla y posibilitar que las cooperativas puedan desempeñarse en una economía mucho más competitiva y abierta, como es la de estos tiempos, en que hay menos intervención del Estado en el funcionamiento de las sociedades que actúan en la economía, para que las cooperativas puedan en la medida de lo posible, contar con condiciones similares a las de otras empresas, guardando sus peculiaridades de acuerdo a la doctrina sobre cooperativismo.

Los representantes de la Confederación General de Cooperativas de Chile recordaron que la reforma a la Ley General de Cooperativas se generó en una propuesta de dicha entidad al entonces Presidente de la República don Patricio Aylwin A., como resultado de un estudio de casi tres años, realizado con consulta a profesionales y dirigentes del cooperativismo chileno. En ese proyecto se tuvo presente, indicó, la “Ley Marco”, que es un instrumento jurídico elaborado por la Comisión de Derecho Cooperativo de la Organización de las Cooperativas de América, que reúne la experiencia y opinión de diferentes legislaciones de América en materias cooperativas.

Dejaron constancia de que las cooperativas observan en todo el mundo normas generales y principios que, con un criterio universal, son representados por la Alianza Cooperativa Internacional.

Hicieron presente su opinión en cuanto a que en lo esencial el proyecto de ley conserva algunos de los aspectos más relevantes de los criterios propuestos en su oportunidad por CONFECOOP, lo que estiman positivo, puntualizando que también encuentran necesario adecuar algunos aspectos del proyecto, efectuando al respecto las siguientes consideraciones:

Atendiendo a la diversidad de actividades que llevan a cabo las cooperativas en sus diferentes tipos, sostuvieron que éstas pueden expresar y señalar en mejor forma cuáles son las normativas legales que más se ajustan a sus actividades operacionales, teniendo plena validez las legítimas propuestas que plantea cada sector.

Destacaron que aspiran a que la nueva Ley General de Cooperativas responda en plenitud a las inquietudes del movimiento cooperativo, para lo cual, sin perjuicio de agilizar su pronta dictación, es preciso tomarse el tiempo necesario para considerar

plenamente todas las opiniones relevantes e informadas del Parlamento, del Gobierno y sobre todo de los propios actores.

Manifestaron que creen de conveniencia considerar en la iniciativa en informe los siguientes criterios:

Tener presente que aún cuando algunos tipos de cooperativas pueden cubrir amplios espectros de la población, otras se orientan hacia sectores específicos que por sus características socioeconómicas deben tener un tratamiento diferenciado.

Impulsar y privilegiar la integración, tanto en el orden gremial como en el de los servicios en materias sociales y económicas para objetivos comunes, así como también en acciones de autocontrol, por delegación del Estado, como existe en avanzadas legislaciones extranjeras.

La incorporación de acciones orientadas al fomento y desarrollo de estas formas de organización, especialmente en lo que se refiere a la vinculación con programas que el mismo Estado promueve, como es el caso de generación de empleo y trabajo, construcción de viviendas, fomento productivo, etc., ello por cuanto la comunidad organizada en estas formas de empresa se convierte en una poderosa herramienta de participación, de creación de ahorro interno, creación de riqueza, redistribución del ingreso, etc.

La educación cooperativa, que tiene que ver con el mejoramiento de los niveles de los dirigentes y asociados para el mejor manejo de su empresa, con su mayor y mejor participación para el ejercicio de la democracia, la cual puede ser autofinanciada por las mismas organizaciones, destinando un porcentaje de sus excedentes o de sus operaciones a este fin, incorporándola como una exigencia permanente en la ley.

Adecuado control del funcionamiento y operación de las organizaciones, especialmente en el caso de aquellas en que está involucrada la fe pública, ya sea en función de la magnitud de los recursos que se manejan y su volatilidad (caso de las cooperativas de ahorro y crédito), de las características de sus participantes (Vivienda, campesinas, pesqueras, trabajo, etc.), en las cuales por un parte es importante el rol de los organismos especializados y sectoriales, pero por otra parte es necesario que también actúen otras instancias como podría ser el mismo Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, o formas de autocontrol del mismo movimiento cooperativo.

Por último, se estima relevante establecer normas que permitan la mayor estabilidad posible al capital y patrimonio de las organizaciones cooperativas, atendiendo a que sus "cuotas de capital" no son acciones transables en el mercado, lo cual en el caso de retiro de algunos socios se traduce en disminución del capital, pudiendo convertirse esta condición, por razones ajenas a la eficiencia de la cooperativa, en una debilidad permanente para la realización de inversiones requeridas para la buena operación de la empresa. Sugirieron la mantención de los mecanismos de creación de

Fondos de Reserva con un porcentaje de los resultados y el perfeccionamiento de los procedimientos para la devolución de los aportes a los socios que se retiren de ellas.

Los representantes de la Federación Chilena de Cooperativas de Ahorro y Crédito hicieron presente a la Comisión, en primer lugar, que el sector que representan está compuesto de un total de 80 cooperativas de ahorro y crédito activas, con alrededor de 500.000 asociados, que a Diciembre de 1998 mantenía activos cercanos a los 120.000 millones de pesos, y que a nivel nacional, más del 8 % de la población económicamente activa pertenece a una cooperativa de ahorro y crédito, existiendo regiones en las que dicha participación asciende a más del 40 % del segmento económicamente activo.

Señalaron, asimismo, que la federación que representan concentra a un total de 64 cooperativas, cuyo tamaño y nivel es heterogéneo, pues mientras la mayor tiene un capital de más de 21.000 millones de pesos la menor tiene un capital social de aproximadamente 2 millones de pesos, precisando que en relación a los préstamos de consumo del sistema financiero nacional, las cooperativas de ahorro y crédito representan el 15,83% del sistema, siendo las de mayor tamaño Coopeuch, Oriencoop y Coocretal.

Expresaron que actualmente el cooperativismo de ahorro y crédito constituye un instrumento de financiamiento a la micro, pequeña, y en algunos casos a la mediana empresa, sin perjuicio del gran papel que juega en el microcrédito, permitiendo a muchos sectores de la población que se encuentran marginados del mercado financiero acceso equitativo a dichos servicios, constituyéndose en un mecanismo real y concreto de generación de riqueza y crecimiento.

Manifestaron que el actual marco regulatorio y de fiscalización les merece reparos, mencionando al efecto que no se reconoce, en propiedad, a las cooperativas de ahorro y crédito como intermediarios financieros y, por tanto, no se les aplica el mismo marco jurídico que a los demás agentes del sistema financiero.

Ello implica, explicaron, que no se les permite el acceso a operaciones propiamente bancarias y, por otra parte, el marco legal es la base para una regulación (Compendio de Normas Financieras del Banco Central) restrictiva y discriminatoria para este tipo de empresas, lo que les impide contar con los mismos instrumentos para competir en el mercado. Sobre el particular mencionaron, a título ejemplar, que para las cooperativas de ahorro y crédito aún se mantiene el sistema de "leverage" (índice de endeudamiento), en circunstancias que para la Banca el Congreso Nacional estableció la exigencia de un coeficiente de solvencia patrimonial (índice de Basilea de un 8% patrimonial en relación con los activos ponderados por riesgo), lo cual mantiene a muchas cooperativas en una permanente "asfixia normativa" que impide su crecimiento.

En cuanto a la fiscalización, observaron, no existe, salvo para dos cooperativas del sector, fiscalización especializada de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Esta debilidad constituiría un serio riesgo, opinaron, debido a las altas tasas

de crecimiento observadas en el sector y considerando, además, que lo normal en nuestro sistema es que las cooperativas perciban recursos a través de los aportes o cuotas de capital (capital social), aún sin recaudar dinero por vía de ahorros o depósitos, situación que igualmente constituye “captación” desde una perspectiva financiera, como ha sido establecido en las directrices del Concordato de Basilea.

Manifestaron que les parecen positivos, entre otros aspectos, el nuevo sistema de constitución de cooperativas, que es más ágil, la incorporación de barreras de acceso al mercado (patrimonio mínimo para cooperativas de ahorro y crédito), el reforzamiento de los mecanismos de solución judicial de conflictos entre los socios y la cooperativa, etc.

Sin embargo, hicieron notar que les parece esencial perfeccionar la redacción del artículo 2º aprobado por la Cámara de Diputados, de manera de consagrar efectivamente y sin lugar a dudas en la interpretación, que las cooperativas podrán tener por objeto cualquier actividad económica y que se regirán por la Ley de Cooperativas en todo lo relativo a su naturaleza jurídica societaria; y que –por otra parte- se regirán en cuanto a las operaciones económicas que realicen, por la legislación específica de la actividad económica que constituya su objeto. A su vez, indicaron, esta correlación de legislación aplicable debe ir aparejada de un control también dual, es decir, control de legalidad del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, y supervisión especializada de acuerdo a la naturaleza específica de la actividad económica de que se trate.

En cuanto a la fiscalización específica para las cooperativas de ahorro y crédito, estimaron necesario consagrar jurídicamente la exigencia de supervisión especializada para todas estas empresas, considerando que ellas efectúan captación de recursos redimibles del público, aún cuando sólo lo hagan por vía de aportes de capital.

Observaron que con el objeto de hacer realizable la fiscalización especializada para un alto número de cooperativas de ahorro y crédito dispersas geográficamente en el país, con volúmenes de activos muy dispares, se propone la instauración de un sistema de supervisión auxiliar que esté constituido por entes privados que desarrollen labores ejecutivas de fiscalización (control a distancia y, especialmente, supervisión en terreno).

Concluyeron señalando que en términos generales esperan una tramitación rápida y expedita del proyecto de ley en informe, con el perfeccionamiento de los aspectos antes mencionados, de manera tal de permitir un efecto práctico de la norma jurídica y que ésta sea efectivamente un elemento que contribuya al crecimiento del sector. Lo anterior contribuiría decisivamente a permitir el acceso a servicios financieros equitativos a muchos sectores de la población que actualmente se encuentran marginados de este mercado, lo que constituye, en su opinión, un elemento de retraso en el proceso de desarrollo de una economía social de mercado emergente como la chilena.

Los representantes de Coopeuch opinaron que si bien el proyecto faculta a las cooperativas de ahorro y crédito a prestar los servicios financieros de acuerdo a la legislación vigente, éstos deben regirse por las normas específicas que regulan estas

actividades, las que corresponden a la Ley General de Bancos y al Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile, las que no mencionan a las cooperativas de ahorro y crédito en las operaciones que permiten y regulan, salvo en el Capítulo III C.2 del Compendio, que se refiere a las cooperativas de ahorro y crédito, pero que limita los tipos de operaciones que estas instituciones pueden realizar.

Plantearon las siguientes observaciones a disposiciones específicas del proyecto en informe:

Artículo 112: Señalaron que estiman de la mayor trascendencia la aprobación de este precepto, pues hasta el momento todas sus gestiones para lograr un mayor nivel de endeudamiento, ser emisores de tarjetas de crédito, etc., han sido infructuosos, dado que el Banco Central de Chile no desea modificar el Compendio de Normas Financieras por la actual Ley de Cooperativas, que en su actual artículo 112 limita las operaciones crediticias de las cooperativas sólo a términos reajustables.

Respecto de la supervisión por parte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, manifestaron que creen que es de gran relevancia y que deberían quedar sujetas a ella todas las cooperativas que tengan captación de recursos de terceros, independientemente de su volumen de activos.

Artículo 115: Señalaron que el precepto, al disponer que las cooperativas deben fijar su política de créditos en un reglamento que debe ser aprobado por el Departamento de Cooperativas, no guarda relación con la supervisión que realizará la Superintendencia de Bancos en algunas cooperativas, pues es este organismo quien dicta las normas que deben seguir las instituciones financieras en su metodología de evaluación de créditos, así como en el resto de las operaciones.

Artículo 41: Estiman que esta disposición, que establece que ningún apoderado podrá representar a más de dos socios, es impracticable para cooperativas como la que representan, que cuenta con más de 170.000 asociados.

Artículo 42: Sobre el particular señalaron que en las cooperativas de importancia económica se debería contemplar como requisito para ser Consejero contar al menos con la educación media completa y que al menos un tercio de ellos sean profesionales, que pueden ser ajenos a la cooperativa, tal como el proyecto contempla para la junta de vigilancia en el artículo 46.

Artículo 122: Expresaron que consideran excesiva la cifra que en la norma se establece para los institutos auxiliares, los que deberían componerse por al menos 7 cooperativas u otras personas jurídicas, especialmente para las cooperativas grandes donde sólo dos pueden representar un 50% del sector.

Los representantes de la Confederación Nacional de Cooperativas Campesinas hicieron presente a los miembros de la Comisión su interés porque no sea derogado el

D.F.L. N° 13, de 1968, del Ministerio de Agricultura, y por la confirmación de los rasgos particulares de la organización económica y social de los campesinos, en el mismo sentido en que lo hace la actual Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario y en que lo han hecho, en diferentes oportunidades, las Comisiones de Agricultura de ambas Cámaras del Congreso.

Expresaron que en el estado actual del trámite legislativo esas cuestiones son tratadas en el artículo 81, donde se asimilan a una misma definición las cooperativas agrícolas y campesinas, y en el artículo 138, que deroga el D.F.L. N° 13, de 1968, y deja sin efecto los artículos 79 y 80 del D.F.L. N° 20, de 1963, que regulan la participación, como socios de cooperativas campesinas, de las personas naturales o jurídicas, dueñas o arrendatarias de los predios en que dichas cooperativas desarrollen sus actividades.

Manifestaron su esperanza de que sus argumentos sean escuchados, toda vez que la intención modernizadora del legislador no puede ignorar la relevancia que tiene para la definición de cualquier política de desarrollo rural la más clara definición de quienes están llamados a ser sus actores fundamentales, cualesquiera sea el modelo de sociedad futura a la que se aspire.

El representante de la Cooperativa Agrícola Control Pisquero de Elqui y Limarí Ltda., planteó diversas observaciones de su representada a la iniciativa legal en informe:

Establecimiento en el proyecto de ley de disposiciones que son incluso más rigurosas que las de la Ley de Sociedades Anónimas, la que se aplica supletoriamente a las cooperativas en las materias no reguladas por la Ley General de Cooperativas, dado que ello significa desconocer la especial naturaleza jurídica societaria de las cooperativas, que difiere sustancialmente de una sociedad constituida en consideración esencial al capital y no a las personas que las conforman.

Eliminación de la disposición que prohíbe a socios comerciar con terceros productos adquiridos en la cooperativa: Hizo presente que no se considera la situación de las cooperativas de producción, transformación industrial o agrícolas, toda vez que a través de ellas los cooperados adquieren bienes necesarios para la explotación de sus propias actividades. Sin embargo, la facultad que se otorgaría a los socios para enajenar tales bienes desnaturalizaría la cooperativa, porque esos bienes no se han adquirido para su venta a terceros sino como un beneficio para los cooperados.

Eliminación de la facultad de suspender socios: Sostuvo que se considera inconveniente, atendido el interés y el bien general de los demás socios de la cooperativa, señalando que se estrecharía el ámbito de la potestad disciplinaria de los órganos sociales, lo que es inapropiado considerando el rol formativo y educador que tienen los institutos cooperativos.

Incorporación de derecho a retiro de cooperados: Expresó que se intenta establecer un verdadero "derecho a retiro" de los socios, a semejanza del establecido en

las sociedades anónimas, institución que constituiría un cuerpo extraño en la legislación cooperativa nacional, toda vez que ella es propia de sociedades de capitales, como son las sociedades anónimas. Recordó que el retiro de un socio implica necesariamente la descapitalización de la cooperativa, pues no existe la misma movilidad de los socios, justamente por el hecho de que las sociedades cooperativas participan mayormente de las características de las sociedades de personas.

Eliminación de la facultad del Consejo de Administración para aceptar la reducción o retiro parcial del capital, sin perder el socio su carácter de tal: Se estima inconveniente la supresión de dicha facultad, toda vez que los socios que deseen la devolución de sus aportes deberán solicitar la devolución íntegra de sus fondos, renunciando a la cooperativa.

Eliminación de fondos de reserva legal y obligación de incorporar una parte de los excedentes de la cooperativa a dichos fondos: A partir de esta modificación no se establecerán limitaciones legales para el reparto de excedentes, lo cual puede llevar a que las cooperativas no puedan capitalizarse debidamente, con el propósito de efectuar las inversiones indispensables para su negocio. Recordó, a este respecto, que la Ley de Sociedades Anónimas establece un mínimo de un 30 % de reparto de utilidades, quedando facultada la sociedad para establecer en sus estatutos la obligación de retener en su patrimonio un porcentaje de las utilidades no repartidas.

Pérdida de beneficio tributario: El artículo 37 bis que se pretende incorporar a la ley establece que el producto de la liquidación de una cooperativa quedará afecto al impuesto global complementario o adicional, cuando corresponda. Se estima inconveniente reducir aún más los beneficios tributarios que conservan las cooperativas.

Eliminación de diferencias entre juntas ordinarias y extraordinarias de socios: Esta distinción se encuentra presente en todos los demás órganos colectivos superiores de las personas jurídicas de derecho privado reconocidas por la ley chilena, verbigracia las asambleas de copropietarios, juntas de accionistas, etc., y la idea matriz de la distinción radica en que toda materia importante para los intereses sociales deba discutirse en una asamblea citada específicamente para ello, quedando los cooperados plenamente informados de la relevancia del asunto que se tratará en la junta correspondiente, evitando así que mayorías circunstanciales puedan, de manera imprevista, tomar decisiones relevantes para la institución.

Representación de los socios en juntas generales: Señaló que estiman que debe mantenerse el requisito de que el apoderado para asistir a la junta sea otro socio de la cooperativa, toda vez que de esa forma se evita que terceros que desconozcan el funcionamiento y las operaciones de ella puedan participar en su principal órgano resolutivo.

Facultades para integrar representantes de personas jurídicas en el Consejo de Administración: Planteó que se considera que no existen razones que fundamenten este tratamiento privilegiado para las personas jurídicas, las cuales podrían asegurar hasta el

40 % de los miembros del Comité de Administración. Además, la propuesta resulta regresiva, toda vez que discrimina negativamente a los cooperados de menores recursos, pues éstos habitualmente actúan como personas naturales y no suelen organizarse societariamente para participar en las cooperativas.

Responsabilidades de los miembros del Consejo de Administración y otros cargos: Se sugiere seguir las reglas generales, de acuerdo a las cuales la solidaridad sólo debiera proceder respecto de los actos dolosos cometidos por dos o más personeros, como, asimismo, que se responda solamente de culpa grave o dolo. Por otra parte, expresó, consideran que las presunciones de responsabilidad que se pretende introducir en el artículo 44 son muy amplias y de consecuencias extremadamente graves.

Causales de disolución de las cooperativas: Observó que se estima inconveniente que un Jefe de Servicio esté facultado para ordenar la disolución de una cooperativa, que es la sanción más grave que puede recibir. Proponen que se mantenga la facultad que en la ley vigente tiene el Departamento de Cooperativas en orden a proponer al Presidente de la República, quien mediante un decreto supremo puede aplicar la sanción de disolución de una cooperativa. Hizo notar, asimismo, que una de las causales que faculta para ordenar la disolución de una cooperativa es la de incumplimiento grave y reiterado de las normas e instrucciones que imparta el Departamento, lo que significa conferirle un poder excesivo, transformando a este órgano en juez, parte, y legislador.

Interpretación administrativa de estatutos: Destacó la inconveniencia de otorgar esta facultad al Departamento de Cooperativas, ya que constituiría una abierta intromisión a la independencia y autonomía, que reconoce la Constitución Política de la República, de los entes corporativos para otorgarse sus propios estatutos y reglamentos, toda vez que la autoridad podría, por vía de interpretación, conferir un sentido distinto a los estatutos y reglamentos que libremente los cooperados han querido darse, dificultando además la revisión judicial de las resoluciones de dicho ente administrativo, que en su papel de ente técnico y especializado habría fijado el verdadero sentido y alcance de las normas.

Otras nuevas atribuciones del Departamento de Cooperativas: Se encuentra inconvenientes las facultades contenidas en los literales b) y m) del artículo 132. En efecto, se estima excesivas las facultades que se otorgan para “examinar las operaciones” de la cooperativa, toda vez que la propia ley ha establecido numerosos mecanismos que permiten salvaguardar a los cooperados ante dificultades o desórdenes administrativos que pudiesen cometer las cooperativas. Por otra parte, se estima que resultaría de suma gravedad que el Departamento tuviere facultades para “prohibir o suspender la ejecución de los acuerdos adoptados por las Juntas Generales”, porque ello implica una intromisión en la autonomía de las cooperativas y de sus socios para efectuar operaciones y actos.

Los representantes de la Federación Nacional de Cooperativas Agrícolas Lecheras de Chile se refirieron a los puntos que principalmente objetan las cooperativas agrupadas en dicha entidad:

1.- Artículo 24.- Establece una facultad de “retiro” de los cooperados respecto de la cooperativa, similar a la de los socios de una sociedad anónima respecto a ésta, pero las causales de retiro son tan amplias, mucho más que en el caso de una sociedad anónima, que el ejercicio de esta facultad puede causar graves dificultades a las cooperativas.

2.- Artículo 36.- Al suprimirse el fondo de reserva como exigencia legal, se priva a la cooperativa de una importante fuente de financiamiento y se deja en una situación de inestabilidad a los fondos de reserva ya existentes, los cuales, de repartirse, afectarían de manera grave las finanzas de muchas cooperativas. El nuevo artículo 37 agudiza esta amenaza, al suprimir la prohibición de repartir los fondos de reserva.

3.- Artículo 41.- Debe exigirse, en primer lugar, que el apoderado sea socio, y, en segundo término, en las cooperativas que por su gran número de cooperados mantienen un sistema de “delegados” a las Juntas, se exige renovarlos anualmente, lo que significaría vivir en un continuo clima de elecciones que perjudicaría el trabajo de la cooperativa.

4.- Artículo 46.- Complica todavía más la “Junta de Vigilancia”, que equivale en las cooperativas a los “inspectores de cuentas” de las sociedades anónimas. Como en éstas, debiera quedar la Junta de Vigilancia como está hoy en día, y dar a la Junta Ordinaria la facultad de nombrar auditores externos en reemplazo de la primera Junta referida.

5.- Artículo 55.- La exención de impuesto de primera categoría a los intereses que paga la cooperativa a sus socios por el capital que tienen en ella debiera mantenerse a lo menos respecto a los socios que declaran renta presunta. De lo contrario, se produce una situación injusta respecto a otros intereses que gane ese agricultor en su giro agrícola y que, amarrados por la presunción de renta, continuarán exentos de dicho impuesto.

6.- Diversas disposiciones dan al Departamento de Cooperativas facultades tan amplias y vagas que de hecho permitirían el control de aquéllas por el Departamento, en una especie de “intervención”. Hay que reducir estas facultades al mínimo necesario, redactarlas con mayor precisión y hacerlas, en todo caso, reclamables ante la justicia ordinaria, suspendiéndose sus efectos hasta que se falle el reclamo. Por vía de ejemplo, mencionaron las facultades de disolver cooperativas; multarlas; pedir balances en cualquier fecha; e impartir instrucciones administrativas, la que, mal interpretada, podría equivaler a manejar la cooperativa.

El representante de la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas Ltda. informó que la mayoría de las cooperativas que están representadas en la agrupación

que dirige son concesionarias de servicio público y son fiscalizadas tanto por el Ministerio de Economía, a través de su departamento de cooperativas, como por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la Comisión Nacional de Energía, en lo que dice relación con el cumplimiento de las normas de la Ley General de Servicios Eléctricos.

Llamó la atención de la Comisión respecto de la preocupación que les causa la norma que dispone que al socio disidente que se retira de la cooperativa debe devolverse sus aportes de capital en un plazo máximo de 90 días, haciendo notar que ello podría provocar un desequilibrio en la caja de las cooperativas eléctricas, que tienen gran cantidad de socios y de capitales involucrados, capitales que están todos invertidos, razón por la cual solicitó se considerara establecer un mecanismo razonable para la devolución de los capitales, dado que la caja de las cooperativas está constituida por su recaudación mensual.

El representante de la Sociedad Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Linares Ltda., LUZAGRO Ltda., indicó que se valora y reconoce el esfuerzo por actualizar el marco jurídico en que se desenvuelven los distintos tipos de cooperativas.

Centraron sus observaciones en dos aspectos del proyecto, el referido a la forma de generación de las autoridades al interior de las Cooperativas y el que les afecta como cooperativas de abastecimiento de energía eléctrica.

Señaló que del análisis del articulado del proyecto se desprende que su primer objetivo es destrabar la creación de nuevas cooperativas, asimilándolas en su constitución a otro tipo de organizaciones económicas tales como sociedades anónimas, limitadas y otras. El proyecto tendría también que permitir que los socios de las cooperativas puedan darse sus propias reglas. No obstante, hizo notar, la iniciativa propone que los poderes para asistir con derecho a voz y voto a las Juntas Generales serán “en la forma que señale el Reglamento” y que “...ningún apoderado podrá representar a más de dos socios”, disposiciones que a juicio de LUZAGRO Ltda. se contradicen con los fundamentos de desregulación del sector y de la adecuación de la legislación a la de otros tipos de sociedades, como asimismo con el objeto claramente señalado en el Mensaje del Poder Ejecutivo, no permitiendo que los socios de una cooperativa puedan darse su propia organización interna.

Expresó que estima que las normas propuestas impiden, además, la participación masiva de socios en las Juntas Generales, dándoles a éstas un menor respaldo en sus decisiones.

La representación por mandatos o poderes es una forma habitual de participación en todo tipo de organización, sostuvo, y no se divisa la necesidad de restringirla o limitarla, menos en sociedades cooperativas, que son por naturaleza económicamente democráticas. Las materias que tienen que ver con la organización interna de una cooperativa deben, a su juicio, ser establecidas por los propios socios en sus estatutos,

evaluando ellos los diversos factores que pueden afectar la real participación de sus socios.

Destacó que considera que sólo podrían aplicarse las normas propuestas por el proyecto de ley en la medida que los estatutos de una cooperativa nada dijeran sobre el particular, solicitando que se modifique el actual artículo 41 de la ley de cooperativas en el sentido de que los máximos a que se refiere el numeral 38 del artículo 1º del proyecto sólo sean aplicables en la medida que los estatutos de una cooperativa nada señalen sobre el uso de poderes para asistir a las Juntas Generales.

Respecto del tipo de poderes que se indican en el número 38 del artículo 1º de la iniciativa, que alude a que los poderes se usarán en la forma que señale el Reglamento, solicitó que la disposición también se aplique a falta de regulación estatutaria en la materia.

En lo referente específicamente a las cooperativas de abastecimiento de energía eléctrica, manifestó que tales cooperativas fueron creadas alrededor del año 1950, como una forma de llevar la electricidad a los sectores rurales del país, donde las compañías privadas y estatales no se interesaban por invertir, debido a su escasa densidad poblacional y, como consecuencia, carencia de factibilidad económica y técnica.

Explicó que el sector eléctrico, dentro del cual se desenvuelven estas cooperativas se modificó sustancialmente a partir de la dictación del D.F.L. Nº 1, Ley General de Servicios Eléctricos, legislación que no contempló a estas pequeñas empresas distribuidoras, dejándolas absolutamente al margen y en condiciones que ponían en riesgo su estabilidad.

Informó que el año 1990 se modificó el D.F.L. Nº 1, en el sentido de que las cooperativas eléctricas podían pedir la concesión del servicio público de distribución, estableciéndose que las cooperativas eléctricas que operen como concesionarias de servicio público de distribución podrán atender a clientes no socios, sin la limitación que establece el actual artículo 96 de la Ley General de Cooperativas (50% de la energía distribuida).

Con la entrada en vigencia de la modificación al D.F.L. Nº 1 la casi totalidad de las cooperativas solicitaron y obtuvieron las concesiones de servicio público de distribución de energía eléctrica, y se sometieron a las normas contenidas en la Ley General de Servicios Eléctricos.

El proyecto de ley en el numeral 101 de su artículo 1º, que contiene un nuevo artículo 96 indica, en su primer inciso, que estas cooperativas sólo podrán distribuir energía eléctrica a sus socios en una zona de concesión solicitada por un tercero hasta la fecha de otorgación de esa concesión. Después de ello no pueden seguir creciendo con la captación de nuevos socios.

En este caso, los nuevos interesados en obtener servicio de distribución de energía sólo lo pueden solicitar al tercero con concesión y no a la cooperativa que se encuentra sirviendo el sector por muchos años.

Esto obliga a todas las cooperativas, y a las que se puedan crear en el futuro, a solicitar la concesión de servicio público y, por tanto, registrarse por las normas del D.F.L. N° 1, ya que de no hacerlo están definitivamente condenadas a congelarse, impidiéndoseles su desarrollo y crecimiento.

Esta norma, a su juicio, se contradice con la voluntad manifestada por el Ejecutivo, en cuanto a que este proyecto de ley permitirá el desarrollo de este tipo de sociedad, ya que, como está demostrado, no podrán seguir creciendo o ampliándose, cuando un tercero ajeno solicite una concesión en su sector.

En el inciso segundo del nuevo artículo 96 que se propone se establece que las cooperativas podrán distribuir energía eléctrica a no socios fuera de las zonas de concesión. Esta norma desconoce la situación actual del sector cooperativo eléctrico y puede generar dificultades incluso a las cooperativas no concesionarias.

A las cooperativas concesionarias les está permitido actualmente distribuir, sin limitación de ninguna especie, energía a clientes no socios, lo que se contradice con lo dispuesto en el antes referido inciso.

En cuanto a las cooperativas no concesionarias, la situación, señaló, es aún más delicada. En efecto, según la normativa legal actual las cooperativas pueden distribuir energía a quienes no tengan la calidad de socios hasta un 50% del volumen de energía distribuida. Una vez que una empresa ajena a ella solicite y obtenga la concesión en el sector de la cooperativa, la norma obligaría a desconocer a estos clientes, ya que, como está dicho en el proyecto, éstas sólo pueden distribuir energía a no socios fuera de las zonas de concesión. Hizo notar que estima que podría darse incluso una objeción de tipo constitucional, al desconocerse un derecho que las cooperativas eléctricas tienen en la legislación actual.

Indicó, asimismo, que considera necesario que se estatuya que las cooperativas eléctricas tienen el derecho a usar o cruzar los bienes nacionales de uso público para el tendido de sus redes destinadas a distribución de energía, lo que permitiría entregar, en este aspecto, un marco jurídico similar a otras empresas, permitiéndoles actuar en igualdad de condiciones y fomentar la libre competencia.

Finalmente, resaltó la importancia que reviste el establecer el derecho que asiste a las cooperativas en su función de distribución de energía eléctrica para tender líneas aéreas y subterráneas en propiedades ajenas y a establecerlas en sus estatutos como una obligación esencial de sus cooperados.

Los representantes de la Federación de Cooperativas de Consumo de Chile Ltda. informaron a los miembros de la Comisión que la prestación básica de sus agrupados consiste en consumo perecible, esto es, fundamentalmente el rubro alimenticio, además de otras como cuota mortuoria, bonificaciones médicas, asesoría legal y ayuda solidaria.

Llamaron la atención sobre la situación actual de ese tipo de cooperativas, la que es crítica, sosteniendo que lo único que los favorecería sería mantener el descuento por planilla de hasta un 40%, lo que les daría un margen para seguir subsistiendo.

El representante de las cooperativas abiertas de vivienda hizo una detallada exposición acerca de la creación y gestión de esa clase de cooperativas, resaltando la capacidad de generar riqueza que conlleva dicha actividad, ejecutada con eficiencia profesional, empresarial y técnica puesta, con sentido social, al servicio de familias de ingresos bajos, que hasta los años setenta sólo podían acceder a la vivienda propia con la acción directa del Estado o de sociedades de asistencia de la Iglesia Católica.

Recordó que las cooperativas abiertas de vivienda fueron creadas por el D.L. Nº 1.320, de 1975, para responder a la necesidad de perfeccionar la estructura de las cooperativas de vivienda, que se habían formado en gran número por iniciativa popular para dar acceso a la vivienda propia a los sectores de ingresos medios y medios bajos. Para ello, manifestó, debían enfrentar su actividad con capacidad, criterios técnicos y administración empresarial. El referido cuerpo legal fue complementado por ley 19.019, del año 1990.

Informó que las cooperativas abiertas de vivienda han asumido, desde su formación, la gestión inmobiliaria social para atender fundamentalmente a los estratos socioeconómicos bajos y medios bajos, y que se entiende por gestión inmobiliaria social aquella que comprende el manejo social y empresarial destinado al desarrollo de intervenciones en urbanización y vivienda, gestión que comprende actividades como la elección y compra de un terreno, planificación, programación, difusión, ejecución de proyectos de loteo, urbanización y arquitectura, selección de empresas constructoras, contratación e inspección técnica de las obras, responsabilidad de la construcción y el total financiamiento de cada programa para aquellas familias que para acceder a la propiedad inmobiliaria necesitan de algún subsidio del Estado.

Señaló que la gestión se extiende hasta la adjudicación de la propiedad a cada uno de los socios, la administración de la empresa y, por sobre todo, la atención, información y orientación y asesoría personalizada a cada uno de ellos, a partir de la decisión individual de iniciar su plan personal de ahorro para la vivienda.

Explicó que la cooperativa abierta de vivienda se distingue de la inmobiliaria con estructura jurídica de sociedad anónima, no sólo por su condición societaria, en que cada socio es un voto, independientemente del capital o número de acciones que ha aportado a la sociedad, sino porque existe identidad entre los dueños de la empresa y los clientes que adquieren las viviendas que produce. Por ello, expresó, las urbanizaciones y

viviendas que construye responden habitualmente a necesidades concretas de personas que se han identificado con un proyecto definido.

Finalizó su intervención haciendo presente que posteriormente haría llegar en forma particularizada las observaciones concretas que el proyecto de ley en estudio merece a su sector.

Concluida la ronda de intervenciones de los representantes del Ejecutivo y de los demás invitados vuestra Comisión se abocó al debate de la iniciativa.

DECISIÓN SOBRE LA DISCUSIÓN

En virtud de los antecedentes entregados y de las consideraciones expuestas precedentemente, vuestra Comisión aprobó en general el proyecto, por la unanimidad de sus miembros presentes, HH. Senadores señora Matthei y señores Lavandero, Novoa y Pizarro.

Los HH. señores Senadores antes mencionados anticiparon su intención de poder perfeccionar, durante el trámite del segundo informe, la normativa sometida a su consideración, haciendo hincapié específicamente en la que regula a las cooperativas de ahorro y crédito, las que no cuentan en la actualidad con una adecuada fiscalización respecto de la gestión financiera que desarrollan.

- - -

Es dable señalar que de acuerdo a lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 36 del Reglamento del Senado la iniciativa sólo fue discutida en general.

En virtud de lo anterior el texto del proyecto de ley en informe es el que consta en el oficio N° 2288, de fecha 30 de marzo de 1999, de la H. Cámara de Diputados, cuyo tenor es el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley General de Cooperativas, cuyo texto refundido se contiene en el decreto supremo N° 502, de 1 de setiembre de 1978, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:

1.- En el artículo 1º:

a) Suprímese el inciso tercero.

b) Sustitúyese el inciso cuarto, por el siguiente:

"Deben distribuir el excedente correspondiente a operaciones con sus socios, a prorrata de aquéllas."

2.- Sustitúyese el artículo 2º, por el siguiente:

"Artículo 2º.- Las cooperativas pueden tener por objeto cualquier actividad y deberán sujetarse a las normas generales o especiales que regulan la actividad que constituye su objeto y por las de la presente ley en aquello que sea propio de la naturaleza de la institución cooperativa."

3.- Derógase el artículo 3º.

4.- Derógase el artículo 4º.

5.- Derógase el artículo 5º.

6.- Derógase el artículo 6º.

7.- Sustitúyese el artículo 7º, por el siguiente:

"Artículo 7º.- Las cooperativas, de acuerdo con sus estatutos, podrán combinar finalidades de diversas clases, salvo aquellas que la ley expresamente exceptúe."

8.- Reemplázase el artículo 8º, por el siguiente:

"Artículo 8º.- Las cooperativas podrán operar con terceros. Sin embargo, no podrán establecer con ellos combinaciones o acuerdos que hagan participar a éstos directa o indirectamente de los beneficios tributarios o de otro orden que la presente ley otorga a estas entidades."

9.- Derógase el artículo 9º.

10.- En el artículo 10 sustitúyese la frase final, por la siguiente:

", salvo aquéllas que se constituyen por un tiempo determinado".

11.- Reemplázase el artículo 11, por el siguiente:

"Artículo 11.- Las cooperativas que se organicen con arreglo a la presente ley gozarán de personalidad jurídica.

La razón social deberá contener elementos indicativos de la naturaleza cooperativa de la institución, los cuales podrán omitirse en la sigla o denominación de fantasía que se adopte.

Ninguna cooperativa podrá adoptar una razón social idéntica a la de otra preexistente. La inclusión en la razón social de una referencia a su objeto no será suficiente para determinar que no existe identidad en la misma."

12.- Sustitúyese el artículo 12, por el siguiente:

"Artículo 12.- El acta de la junta general constitutiva, que deberá ser reducida a escritura pública, debe expresar el nombre, profesión o actividad, domicilio y rol único tributario de los socios que concurren a su constitución, debiendo asimismo contener sus estatutos, los que deben indicar, a lo menos, la razón social y domicilio de la cooperativa, el o los objetos específicos que perseguirá, su capital inicial suscrito y pagado, el nombre de los miembros de su consejo de administración provisorio y los demás requisitos que indique el reglamento."

13.- Sustitúyese el artículo 13, por el siguiente:

"Artículo 13.- La cooperativa deberá depositar tres copias autorizadas del acta de la junta general constitutiva en el Departamento de Cooperativas, el que llevará un registro de estas instituciones y de los antecedentes de su constitución.

La cooperativa tendrá personalidad jurídica por el solo hecho de publicar en el Diario Oficial un extracto del acta, que deberá contener, a lo menos, la razón social y domicilio de la cooperativa, una referencia a su objeto, el número de los socios que concurren a su constitución, el notario ante el cual se redujo a escritura pública el acta, la fecha de la escritura y el número de registro que le haya asignado el Departamento de Cooperativas.

El depósito y publicación a que se refieren los incisos precedentes deberán efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la realización de la junta general constitutiva. Si así no se hiciere, deberá procederse nuevamente en la forma señalada en el artículo anterior."

14.- Sustitúyese el artículo 14, por el siguiente:

"Artículo 14.- El Departamento de Cooperativas no podrá negar el registro de una cooperativa y deberá insertar en las copias autorizadas de la escritura pública, que contenga el acta de la junta general constitutiva que se le presente para tal efecto, el número de registro correspondiente.

Sin embargo, dentro del plazo de 60 días, contado desde la fecha de registro a que se refiere el inciso anterior, el Departamento de Cooperativas podrá

objetar la constitución de la cooperativa si faltare cumplir algún requisito para su constitución o si los estatutos no se ajustaren a lo previsto por la ley o su reglamento.

Dentro del plazo de 60 días, contado desde la recepción del oficio mediante el cual el Departamento de Cooperativas hubiere objetado su constitución, la cooperativa deberá subsanar los defectos de constitución o adecuar sus estatutos a las observaciones formuladas. Si así no se procediere, el Departamento de Cooperativas mediante la dictación de una resolución, cuyo extracto deberá ser publicado en el Diario Oficial, declarará la disolución de la cooperativa.

En tal caso, los miembros del consejo de administración responderán solidariamente por las obligaciones que la cooperativa haya contraído."

15.- Sustitúyese el artículo 15, por el siguiente:

"Artículo 15.- La reforma de los estatutos de las cooperativas se someterá, en lo que sea pertinente, a lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 14. Si la cooperativa no subsanare los vicios en que se hubiere incurrido al acordarse la reforma de los estatutos o no adecuar sus estatutos a las observaciones formuladas, en el plazo señalado en el inciso tercero del artículo precedente, el Departamento de Cooperativas dictará una resolución, cuyo extracto deberá ser publicado en el Diario Oficial, dejando sin efecto la reforma de los estatutos.

En forma conjunta con el cumplimiento de la obligación de depósito a que se refiere el artículo 13, se deberá presentar al Departamento de Cooperativas documentos que acrediten el cumplimiento de las formalidades de convocatoria de la junta general de socios que haya aprobado la reforma de los estatutos sociales y los demás antecedentes que sean necesarios para acreditar que el acuerdo respectivo ha sido adoptado con sujeción a la ley, su reglamento y los estatutos.

Si no se diere íntegro cumplimiento a la obligación a que se refiere el inciso anterior, el Departamento de Cooperativas podrá solicitar a la cooperativa los antecedentes faltantes, caso en el cual se suspenderá el plazo a que se refiere el inciso segundo del artículo 14, por el término que se otorgue para la presentación de los antecedentes solicitados."

16.- Sustitúyese el artículo 16, por el siguiente:

"Artículo 16.- Los interesados en formar cooperativas de ahorro y crédito y de vivienda deberán someter a la aprobación del Departamento de Cooperativas un estudio socioeconómico sobre las condiciones, posibilidades financieras y planes de trabajo que se proponen desarrollar. En caso de rechazo podrá reclamarse ante el Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de recepción del oficio mediante el cual se haya rechazado el estudio socioeconómico. El Departamento de Cooperativas tendrá un plazo de 60 días para

formular observaciones u objeciones al estudio socioeconómico; si no se formularan dentro de dicho plazo, el estudio se tendrá por aprobado.

La junta general constitutiva de las cooperativas mencionadas en el inciso precedente se deberá celebrar con posterioridad a la aprobación del respectivo estudio socioeconómico."

17.- En el artículo 17:

a) Intercálanse los siguientes incisos nuevos, como primero y segundo:

"Salvo los casos especialmente previstos en esta ley, el número de socios de una cooperativa será ilimitado, a partir de un mínimo de diez.

Si el número de socios de una cooperativa se redujere a un número inferior al mínimo, estará obligada a completarlo dentro del plazo de 6 meses. Si así no lo hiciere, se declarará su disolución por resolución del Departamento de Cooperativas."

b) Reemplázase el inciso primero, que pasa a ser tercero, por el siguiente:

"Podrán ser socios de una cooperativa las personas naturales mayores de 18 años, las que serán plenamente capaces de ingresar y actuar como tales, y las personas jurídicas de derecho público o privado."

c) Suprímese el inciso segundo.

18.- Derógase el artículo 18.

19.- Sustitúyese el artículo 19, por el siguiente:

"Artículo 19.- Los socios de las cooperativas podrán pertenecer a dos o más entidades de igual finalidad, salvo que sus estatutos lo prohiban.

Los estatutos podrán autorizar a los herederos del socio, persona natural que haya fallecido, que continúen como miembros de la cooperativa como comunidad indivisa, designando un procurador común que los representen.

La persona que sea socio de más de una cooperativa de igual finalidad, sólo podrá desempeñar cargos directivos en una de ellas.

Los estatutos de las cooperativas podrán prohibir que sus socios efectúen, dentro de la zona de funcionamiento que señalan, operaciones de la misma índole de las que la respectiva cooperativa ejecute."

20.- Sustitúyese el artículo 20, por el siguiente:

"Artículo 20.- La adquisición, el ejercicio y la pérdida de la calidad de socio y las prestaciones mutuas a que haya lugar por estas causas, se regirán por los estatutos conforme a las normas de la presente ley.

El reglamento que se dicte será, en esta materia, supletorio de las disposiciones estatutarias."

21.- Sustitúyese el artículo 21, por el siguiente:

"Artículo 21.- Las cooperativas podrán suspender transitoriamente el ingreso de socios, cuando sus recursos sean insuficientes para atenderlos.

No podrá limitarse el ingreso de socios por razones políticas, religiosas o sociales, sin perjuicio del derecho del consejo de administración de calificar el ingreso de socios."

22.- Sustitúyese el artículo 22, por el siguiente:

"Artículo 22.- Ningún socio puede ser propietario de más del 20% del capital de una cooperativa. Se exceptúan las personas jurídicas que de acuerdo a sus estatutos no persiguen fines de lucro, las que pueden ser propietarias hasta de un 50% de dicho capital. Estas limitaciones no son aplicables a las personas jurídicas de derecho público ni a las cooperativas.

Las cooperativas podrán establecer escalas de aportes mínimos para determinar el volumen de operaciones que podrán efectuar los socios."

23.- Sustitúyese el artículo 24, por el siguiente:

"Artículo 24.- La persona que haya perdido la calidad de socio por renuncia o exclusión y los herederos del socio fallecido tendrán derecho a la devolución del monto revalorizado de sus aportes de capital, con las modalidades establecidas en los estatutos.

La renuncia sólo podrá ser rechazada en los casos previstos en el reglamento y en los estatutos.

La adopción de alguno de los acuerdos señalados en el artículo 41 bis, salvo respecto de lo indicado en las letras b), c), f), i) y l) concederá derecho al socio disidente a retirarse de la cooperativa, la que no podrá rechazar la renuncia en ningún caso.

Se considerará socio disidente a aquél que en la respectiva junta se hubiere opuesto al acuerdo pertinente o que, no habiendo concurrido a la junta,

manifieste su disidencia por escrito a la cooperativa, dentro del plazo de 15 días desde que tome conocimiento de dicho acuerdo.

El socio disidente que se retire de la cooperativa tendrá derecho a que se le pague dentro del plazo de 90 días, a contar de la fecha de presentación de la solicitud de retiro, el monto revalorizado de sus aportes de capital.

El derecho a retiro deberá ser ejercido dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que la junta general de socios haya adoptado el acuerdo que lo motiva.

El consejo de administración podrá convocar a una nueva junta general que deberá celebrarse a más tardar dentro de los 30 días siguientes contados desde el vencimiento del plazo para ejercer el derecho a retiro, a fin de que se reconsidere o ratifique los acuerdos que motivaron su ejercicio. Si en dicha junta se revocaren los mencionados acuerdos, caducará el referido derecho a retiro. Si se ratificaren dichos acuerdos, no se abrirá un nuevo plazo para ejercerlo."

24.- Intercálase el siguiente artículo 24 bis:

"Artículo 24 bis.- Los conflictos jurídicos que se susciten entre los socios en su calidad de tales y entre éstos y las cooperativas de las que formen o hayan formado parte, que se sometan al conocimiento de los tribunales ordinarios de justicia, se tramitarán conforme al procedimiento sumario establecido en los artículos 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil."

25.- En el artículo 25:

a) Elimínase la frase final: "y se formará con las sumas que paguen los socios por la suscripción de sus acciones".

b) Agregase los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, nuevos:

"Al momento de su constitución deberá encontrarse pagado al menos un 25% del capital suscrito, salvo en el caso señalado en el inciso tercero del artículo 99 y el de las cooperativas cerradas de vivienda, en que el porcentaje será fijado por el Departamento de Cooperativas.

El capital inicial deberá pagarse en un plazo máximo de 3 años, que se contará desde la fecha en que se publique el extracto del acta de la junta general constitutiva.

Los aumentos de capital deberán pagarse dentro de los 3 años siguientes a la fecha en que se adopte el acuerdo respectivo.

Una vez vencido el plazo referido en los incisos precedentes, sin que se haya enterado el capital suscrito o el aumento del capital, según corresponda, éste quedará reducido a la cantidad efectivamente pagada. Sin embargo, el Departamento de Cooperativas podrá declarar la disolución de las cooperativas de vivienda y de ahorro y crédito, que no paguen oportunamente el capital inicial, sin perjuicio del ejercicio de su facultad de normalización."

26.- Derógase el artículo 26.

27.- Reemplázanse en el artículo 27, las palabras "acciones" por "cuotas de capital" y "ellos" por "ellas".

28.- Derógase el artículo 28.

29.- En el artículo 29:

a) Sustitúyese en los incisos primero y tercero la palabra "acciones" por "cuotas de capital".

b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

"Se prohíbe la creación de cuotas de capital de organización y privilegiadas".

30.- Sustitúyese el artículo 30, por el siguiente:

"Artículo 30.- El capital propio de las cooperativas deberá revalorizarse cada año en los términos establecidos en el artículo 17, número 1 del decreto ley N° 824, de 1974.

Las cooperativas de vivienda podrán aplicar trimestralmente las citadas disposiciones, sin perjuicio de que anualmente las revalorizaciones trimestrales se ajusten a las normas generales sobre corrección monetaria establecidas en las mismas."

31.- Derógase el artículo 33.

32.- Reemplázase en el artículo 34 la palabra "acciones" por "cuotas de capital".

33.- Derógase el artículo 35.

34.- Sustitúyese el artículo 36, por el siguiente:

"Artículo 36.- El saldo favorable del ejercicio económico, que se denominará remanente, podrá destinarse a absorber las pérdidas acumuladas o, indistintamente, a constituir o incrementar fondos de reserva y/o ser distribuido en dinero

entre los socios, según lo dispongan los estatutos o los acuerdos de la junta general de socios."

35.- Sustitúyese el artículo 37, por el siguiente:

"Artículo 37.- El excedente se repartirá en dinero entre los socios, pudiendo también ser capitalizado, en cuyo caso se emitirán cuotas de capital liberadas.

La porción del excedente que corresponda a operaciones realizadas por la cooperativa con los socios será distribuida entre éstos a prorrata de aquéllas.

El excedente, en la parte que se haya producido en operaciones realizadas con terceros, se distribuirá entre los socios a prorrata de sus cuotas de capital."

36.- Intercálase el siguiente artículo 37 bis:

"Artículo 37 bis.- En caso de liquidación, la porción de los fondos de reserva que se haya originado en donaciones recibidas por la cooperativa, salvo en el caso señalado en el artículo 108, deberá destinarse al objeto que señalen los estatutos. A falta de mención expresa, corresponderá a la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción destinarlos en favor de una o más de las instituciones regidas por la presente ley.

Los fondos de reserva y cualesquiera excedente que se distribuya en caso de liquidación de una cooperativa quedarán afectos al impuesto global complementario o adicional, según corresponda, de acuerdo con la Ley de Impuesto a la Renta."

37.- Derógase el artículo 40.

38.- En el artículo 41:

1. Sustitúyese, en la frase final del inciso segundo, la palabra "simple" por la frase "en la forma que señale el reglamento".

2. a) Sustitúyense en el párrafo primero del inciso tercero la expresión "y de los comités" por una coma (,); y las palabras "las cooperativas" por "la cooperativa".

b) Elimínase el párrafo final del inciso tercero.

3. Sustitúyese el inciso cuarto, por el siguiente:

"Ningún apoderado podrá representar a más de dos socios."

4. Sustitúyese en el último inciso, la palabra "Ordinaria" por las palabras: "General de Socios".

39.- Intercálase el siguiente artículo 41 bis:

"Artículo 41 bis.- Requerirán la conformidad de los dos tercios de los socios presentes o representados en la junta general respectiva, los acuerdos relativos a las siguientes materias:

- a) Transformación, fusión o división de la cooperativa;
- b) Disolución de la cooperativa;
- c) Aprobación de aportes y estimación de bienes no consistentes en dinero;
- d) Enajenación de todo el activo y pasivo de la cooperativa o del total de su activo;
- e) Cambio de domicilio social a una región distinta;
- f) Modificación del objeto social;
- g) Modificación de la forma de integración de los órganos de la cooperativa y de sus atribuciones;
- h) Alteración grave de los derechos y obligaciones de los socios que se encuentren establecidos en los estatutos;
- i) Emisión de cuotas de capital de serie;
- j) Aumento del capital social, en caso que sea obligatorio que los socios concurren a la suscripción y pago de las cuotas de capital respectivas;
- k) Adquisición por parte de la cooperativa del carácter de socio de sociedades colectivas y de socio gestor de sociedades encomanditas, y la celebración de cualquier contrato que genere la responsabilidad solidaria o ilimitada de la cooperativa por obligaciones de terceros, y
- l) Otras que señalen los estatutos.

El reglamento determinará la forma y procedimiento de la convocatoria a esta junta y regulará las obligaciones establecidas en este artículo."

40.- Sustitúyese el artículo 42, por el siguiente:

"Artículo 42.- El consejo de administración, que será elegido por la junta general de socios, tiene a su cargo la administración superior de los negocios sociales y representa judicial y extrajudicialmente a la cooperativa para el cumplimiento del objeto social, sin perjuicio de la representación que compete al gerente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 de esta ley.

Las cooperativas podrán contemplar en sus estatutos cláusulas que confieran a las personas jurídicas de derecho público o privado que participen en ellas el derecho a designar un determinado número de miembros del consejo de administración, pero en todo caso este privilegio se limitará a una minoría de los mismos.

Las cooperativas podrán contemplar en sus estatutos la participación de sus trabajadores en el consejo de administración. Los consejeros laborales gozarán del fuero establecido en el artículo 174 del Código del Trabajo, desde la fecha de su elección y hasta 6 meses después de haber cesado en el cargo, siempre que la cesación en él no se hubiere producido por censura de la asamblea de los trabajadores, por sanción aplicada por el tribunal competente en cuya virtud deba hacer abandono del mismo, o por término de la empresa.

A lo menos, el 60% de los integrantes titulares y suplentes del consejo de administración deberán ser elegidos por los socios usuarios de la cooperativa."

41.- Intercálase el siguiente artículo 42 bis:

"Artículo 42 bis.- El consejo de administración, por la mayoría de sus componentes, podrá delegar parte de sus facultades en el gerente o en uno o más consejeros o funcionarios de la cooperativa. Podrá asimismo delegarlas en otras personas para fines especialmente determinados."

42.- Reemplázase el artículo 43, por el siguiente:

"Artículo 43.- Los consejeros, los gerentes, los socios administradores a que se refiere el inciso primero del artículo 68 bis y los miembros del comité organizador y de la comisión liquidadora o el liquidador, según el caso, responderán hasta de la culpa leve en el ejercicio de sus funciones, y serán responsables solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que causen a la cooperativa por sus actuaciones dolosas o culposas.

La aprobación otorgada por la junta general a la memoria y balance que aquellos presenten, o a cualquier cuenta o información general no los libera de la responsabilidad que les corresponda por actos o negocios determinados; ni la aprobación específica de éstos los exonera de aquella responsabilidad, cuando se hubieren celebrado con culpa o dolo.

El consejero que desee salvar su responsabilidad personal deberá hacer constar en el acta su opinión y si estuviere imposibilitado para ello hará una

declaración por escrito ante el Departamento de Cooperativas, dentro del plazo de 10 días de celebrada la sesión respectiva o de la fecha en que hubiere cesado la imposibilidad."

43.- Reemplázase el artículo 44, por el siguiente:

"Artículo 44.- Se presume la responsabilidad de las personas indicadas en el artículo 43, según corresponda, en los siguientes casos:

1. Si la cooperativa no llevare sus libros o registros o los llevare incorrectamente.

2. Si se repartieren excedentes provisionales habiendo pérdidas o que no correspondieren.

3. Si la cooperativa ocultare sus bienes, reconociere deudas supuestas o simulare enajenaciones, y

4. Si la cooperativa no diere cumplimiento a sus obligaciones legales, reglamentarias y estatutarias, y a las instrucciones del Departamento de Cooperativas."

44.- En el 45:

a) Suprímese en el párrafo primero del inciso primero, la palabra "empleado".

b) Suprímense los incisos segundo, tercero y cuarto.

45.- En el artículo 46 :

a) Reemplázase el inciso primero, por el siguiente:

"La junta general nombrará una junta de vigilancia que estará compuesta hasta por 5 miembros, pudiendo ser hasta 2 de ellos, profesionales ajenos a la cooperativa. Dicha junta tendrá por objeto examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros y las demás atribuciones que se establezcan en los estatutos y en el reglamento."

b) Elimínase el inciso segundo, y en el tercero todo el párrafo primero hasta el punto seguido, y sustitúyense las palabras "unión o sociedad" por "o instituto".

46.- Sustitúyese el artículo 47, por el siguiente:

"Artículo 47.- Para todos los efectos legales se estimará que las instituciones regidas por la presente ley no obtienen utilidades, salvo para los efectos de lo dispuesto en los artículos 46 al 52 del Código del Trabajo."

47.- Derógase el artículo 48.

48.- Derógase el artículo 49.

49.- Reemplázase el artículo 50, por el siguiente:

"Artículo 50.- Las cooperativas se disuelven:

a) Por el vencimiento del plazo de duración, si lo hubiere.

b) Por acuerdo de la junta general.

c) Por resolución fundada del Departamento de Cooperativas, cuyo extracto deberá ser publicado en el Diario Oficial, por alguna de las siguientes causales:

1) Incumplimiento grave o reiterado de las normas que fije e instrucciones que imparta el Departamento de Cooperativas, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 132;

2) Contravención grave o inobservancia de la ley o de los estatutos sociales, y

3) Las demás que contemple la ley.

d) Por las demás causales contempladas en los estatutos."

50.- Sustitúyese el artículo 51 por el siguiente:

"Artículo 51.- Cuando la disolución se produzca por alguna de las causales contempladas en las letras a) y d) del artículo precedente, el consejo de administración, dentro de los 30 días siguientes, consignará este hecho por escritura pública, cuyo extracto deberá depositarse en el Departamento de Cooperativas y publicarse en el Diario Oficial.

Una vez que hayan transcurrido 60 días, a contar del vencimiento del término de duración de la entidad, sin que se haya dado cumplimiento a las formalidades establecidas en el inciso precedente, el gerente, cualquier miembro, titular o suplente, del consejo de administración, socio o tercero interesado podrá dar cumplimiento a ellas.

Si no se diere cumplimiento a esas formalidades, el Departamento de Cooperativas dictará una resolución que se deberá anotar en el registro a que se refiere el artículo 13 y publicarse, en extracto, en el Diario Oficial.

Sin perjuicio de lo anterior, sea cual fuere la causal de disolución de una cooperativa, ésta deberá ser notificada a los socios mediante carta certificada."

51.- Intercálase el siguiente artículo 51 bis:

"Artículo 51 bis.- Dos o más cooperativas podrán fusionarse.

La fusión consiste en la reunión de dos o más cooperativas en una sola que las sucede en todos sus derechos y obligaciones, y a la cual se incorporan la totalidad del patrimonio y socios de los entes fusionados.

Hay fusión por creación, cuando el activo y pasivo de dos o más cooperativas que se disuelven, se aportan a una nueva cooperativa que se constituye.

Hay fusión por incorporación, cuando una o más cooperativas que se disuelven son absorbidas por una cooperativa ya existente, la que adquiere todos sus activos y pasivos.

En estos casos, no procederá la liquidación de las cooperativas fusionadas o absorbidas.

En las juntas generales en que se acuerde la fusión deberán aprobarse los balances auditados de las cooperativas que se fusionan.

Ningún socio, a menos que consienta en ello, podrá perder su calidad de tal, con motivo de una fusión por creación o incorporación."

52.- Sustitúyese el artículo 52, por el siguiente:

"Artículo 52.- La división de las cooperativas y su transformación en otro tipo de sociedad, deberá ser acordada en junta general de socios citada especialmente con dicho objeto.

La división consiste en la distribución del patrimonio de la cooperativa entre sí y una o más cooperativas que se constituyan al efecto, correspondiéndoles a los socios de la cooperativa dividida, la misma proporción en el capital de cada una de las nuevas cooperativas que aquellas que poseían en la cooperativa que se divide.

La transformación consiste en la modificación de los estatutos de una cooperativa, mediante la cual se la somete a un régimen jurídico aplicable a otro tipo de sociedad, subsistiendo su personalidad jurídica.

Antes de la adopción del acuerdo de división o de transformación, deberá someterse a consideración de la junta general de socios el balance de la entidad y los estados y demostraciones financieras que el reglamento determine, auditados por profesionales independientes designados por la junta general de socios.

En el caso de transformación de la entidad, los socios que no deseen continuar en la sociedad que resulte de la transformación, tendrán derecho a que se les restituya, dentro del plazo de 90 días a contar de la fecha de presentación de la solicitud de renuncia, el valor revalorizado de sus cuotas de capital, incrementado con una participación proporcional a éstas, en los fondos de reserva colectivos que la cooperativa tuviere a la fecha del acuerdo.

El derecho para solicitar el rescate de los valores indicados en el inciso precedente caducará dentro de los noventa días siguientes a la fecha del acuerdo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 24, inciso cuarto, respecto del derecho a retiro y podrá ser ejercido ante la cooperativa o ante la sociedad que resulte de la transformación.

Ningún socio, a menos que consienta en ello, podrá perder su calidad de tal, con motivo de una división o transformación de la cooperativa a la cual pertenece."

53.- Intercálase el siguiente artículo 52 bis:

"Artículo 52 bis.- En el caso que la cooperativa se disuelva por la causal señalada en la letra b) del artículo 50, o en caso de fusión, división o transformación de cooperativas, se deberán aplicar las formalidades establecidas en los artículos 12, 13, 14 y 15, en la forma que establezca el reglamento."

54.- Sustitúyese el artículo 53, por el siguiente:

"Artículo 53.- La liquidación de una cooperativa disuelta será realizada por una comisión de tres personas elegidas por la junta general de socios.

En el caso señalado en la letra c) del artículo 50, el Departamento de Cooperativas, por resolución fundada, cuyo extracto deberá ser publicado en el Diario Oficial, podrá designar a los miembros de la comisión o al liquidador que realizará la liquidación."

55.- Intercálase el siguiente artículo 53 bis:

"Artículo 53 bis.- La cooperativa disuelta subsiste como persona jurídica para los efectos de su liquidación, quedando vigentes sus estatutos en lo que fuere pertinente. En este caso, deberá agregar a su razón social las palabras "en liquidación"."

56.- En el artículo 54:

a) Sustitúyese en la letra b) los vocablos "decreto ley 619, de 1974," por "decreto ley N° 3.475, de 1980".

b) Sustitúyese la frase final del inciso segundo, después de las palabras "necesarias para" por "aplicar esta disposición".

c) Sustitúyese en el inciso final, los vocablos "y sociedades" por "e institutos".

57.- Derógase el artículo 55.

58.- Sustitúyese el artículo 56, por el siguiente:

"Artículo 56.- El aumento del valor nominal de las cuotas de capital y cuotas de ahorro y la devolución de excedentes originados en operaciones con los socios estarán exentos de todo impuesto."

59.- Intercálase en el artículo 57, después de la palabra "excedentes", la frase "y los intereses correspondientes a sus cuotas de capital".

60.- Agrégase el siguiente artículo nuevo, como 58:

"Artículo 58.- Las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, estarán obligadas a efectuar descuentos por planilla de las remuneraciones de sus trabajadores, que sean socios de cooperativas de vivienda, de consumo y de ahorro y crédito, en favor de éstas.

Esta obligación será asimismo aplicable a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, al Instituto de Normalización Previsional y a las Administradoras de Fondos de Pensiones, entidades que deberán efectuarlos de las pensiones y jubilaciones que paguen, y a las Compañías de Seguros que deberán realizarlos de las rentas o pensiones vitalicias que paguen por aplicación del número 1 del artículo 62 del decreto ley N° 3.500, de 1980.

Los mencionados descuentos no podrán exceder en conjunto del 40% del total de la remuneración, jubilación o pensión mensual líquida del socio, conforme a las siguientes reglas:

a) Los descuentos por concepto de obligaciones pecuniarias contraídas por el socio, en favor de cooperativas de ahorro y crédito y de consumo no podrán superar en conjunto el 25% de la remuneración, jubilación o pensión líquida del socio, y preferirán unos u otros según las fechas en que las deudas que los originan hayan sido contraídas.

b) Los descuentos por concepto de cuotas sociales, suscripción de cuotas de capital y del valor que corresponda a los socios en los dividendos hipotecarios en favor de cooperativas de vivienda, preferirán a los otros descuentos, no pudiendo ser superiores a un 25%, si al socio se le ha asignado en uso y goce o adjudicado en dominio, la vivienda que le corresponde, o al 15% en caso contrario, de la remuneración, jubilación o pensión líquida del socio.

Los descuentos señalados en el presente artículo preferirán a todo otro descuento, con excepción de los contemplados en el inciso primero del artículo 58 y en el inciso segundo del artículo 59 del Código del Trabajo."

61.- Agrégase el siguiente artículo nuevo, como 59:

"Artículo 59.- Los descuentos señalados en el artículo precedente se deberán efectuar con el solo mérito de la autorización por escrito del socio de la cooperativa, la que deberá ser otorgada para cada operación.

La persona natural o jurídica que haya efectuado los descuentos deberá entregárselos a la cooperativa respectiva, dentro de los primeros 10 días del mes siguiente a la fecha en que hayan debido pagarse las remuneraciones."

62.- Agrégase el siguiente artículo nuevo, como 60:

"Artículo 60.- Si transcurrieren más de diez días contados desde la fecha en que debieron hacerse los descuentos y no los hubieren efectuado o no hubieren procedido a enterarlos se devengará, en perjuicio del obligado a hacerlos, el interés máximo convencional sobre las cantidades que correspondía descontar, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere afectar al infractor.

El interés mencionado en este artículo será aplicado en conformidad a lo dispuesto en el Título II del Libro V del Código del Trabajo."

63.- Derógase el artículo 61.

64.- Derógase el artículo 62.

65.- Derógase el artículo 63.

66.- Elimínase la frase final del artículo 64, que dice:

"Lo dicho se entiende sin perjuicio de lo establecido en los artículos 134 y 135.

67.- En el artículo 65:

a) Sustitúyese la frase "La Dirección de Industria y Comercio podrá ordenar", por la siguiente: "El Departamento de Cooperativas o cualquier persona podrá solicitar al Juzgado de Policía Local, correspondiente al domicilio del infractor, que ordene".

b) Elimínase la frase final "para cuyo efecto contará con el auxilio de la fuerza pública", sustituyéndose la coma (,) que la antecede, por un punto (.) final.

68.- Derógase el artículo 66.

69.- Sustitúyese el artículo 67 por el siguiente:

"Artículo 67.- Los consejeros, gerentes, liquidadores, inspectores de cuentas, integrantes de la junta de vigilancia, de la comisión liquidadora y del comité organizador y los socios de las cooperativas con los cuales el gerente deba ejercer sus atribuciones en mérito de lo establecido en el artículo 68 bis, que incurran en infracciones a las leyes, al reglamento, a los estatutos y a las demás normas que rigen a las cooperativas, o en incumplimiento de las instrucciones que les imparta el Departamento de Cooperativas, podrán ser objeto de la aplicación por éste de una multa a beneficio fiscal, la que deberá ser cumplida solidariamente por los infractores, hasta por un monto global por cooperativa equivalente a 25 unidades tributarias mensuales. Si se tratare de infracciones reiteradas de la misma naturaleza, la multa podrá alcanzar hasta un monto equivalente a 50 unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de las establecidas en otras leyes y de su disolución por aplicación de la letra c) del artículo 50 de esta ley, en su caso.

Se podrá asimismo imponer la multa a que se refiere el inciso primero a los contadores, auditores, asesores, trabajadores y a toda otra persona que hubiere ejecutado o celebrado con la cooperativa actos o convenciones de cualquiera naturaleza, que habiendo sido citadas por el Departamento de Cooperativas, de acuerdo a lo establecido en la letra g) del artículo 132, no concurran sin causa justificada, y a los auditores externos que no den cumplimiento a las normas que les imparta el Departamento de Cooperativas en ejercicio de la facultad que le concede la letra j) de la citada disposición."

70.- Intercálase el siguiente artículo 67 bis:

"Artículo 67 bis.- Las resoluciones que apliquen multas tendrán mérito ejecutivo desde que se hagan exigibles y su cobro corresponderá a la Tesorería General de la República.

Si hubiere reclamo del afectado se suspenderá el cobro ejecutivo hasta el fallo del reclamo."

71.- Sustitúyese el artículo 68 por el siguiente:

"Artículo 68.- Son cooperativas de trabajo las que tienen por objeto producir o transformar bienes y/o prestar servicios a terceros, mediante el trabajo

mancomunado de sus socios y cuya retribución debe fijarse de acuerdo a la labor realizada por cada cual.

Los aportes de los socios personas naturales deberán consistir necesariamente en el trabajo que se obliguen a realizar, sin perjuicio de los aportes que hagan en dinero, bienes muebles o inmuebles.

A los inmuebles que los socios aporten a la cooperativa, no se les aplicará la exención establecida en el artículo 54, letra a), de esta ley.

Las cooperativas de trabajo deberán tener un mínimo de cinco socios."

72.- En el artículo 68 bis, elimínase su inciso segundo y en el tercero la expresión "que deberán ser socios".

73.- Derógase el artículo 69.

74.- Derógase el artículo 70.

75.- Derógase el artículo 71.

76.- Derógase el artículo 72.

77.- Derógase el artículo 73.

78.- Derógase el artículo 74.

79.- Sustitúyese el artículo 75 por el siguiente:

"Artículo 75.- El excedente se distribuirá entre los socios en proporción al trabajo realizado por cada uno de ellos, según las normas generales que fije el respectivo estatuto.

Los socios trabajadores no tendrán derecho a percibir remuneración, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente."

80.- Sustitúyese el artículo 76, por el siguiente:

"Artículo 76.- Los socios podrán percibir una suma equivalente a un ingreso mínimo mensual si trabajan durante la jornada ordinaria de trabajo o a la proporción correspondiente en caso contrario. Dichas sumas serán consideradas gastos del ejercicio en que hayan sido devengadas y los socios no estarán obligados a devolverlas en caso alguno.

Los socios podrán hacer retiros anticipados durante el ejercicio con cargo a los excedentes del mismo. El monto máximo de dichos retiros será determinado por el consejo de administración. Estos retiros no podrán ser superiores a la suma de los excedentes devengados en el curso del ejercicio, más los saldos no distribuidos en los ejercicios anteriores.

Las sumas retiradas en exceso deberán ser cubiertas por los socios, sin perjuicio de la responsabilidad de los miembros del consejo que hubieren adoptado el acuerdo respectivo y del gerente que no haya manifestado su opinión en contrario.

El Departamento de Cooperativas tendrá la facultad de dictar normas que regulen el tratamiento de los anticipos retirados en exceso, en el evento que éstos no sean reintegrados en el ejercicio siguiente a aquél en que se pagaron."

81.- Sustitúyese el artículo 77, por el siguiente:

"Artículo 77.- El ingreso, retiro o exclusión de los socios, de prestaciones mutuas a que haya lugar por estas causas y, en general, las relaciones laborales entre los socios y las cooperativas de trabajo, no se regirán por las normas del Código del Trabajo sino por las contenidas en esta ley, el estatuto, el reglamento interno de la cooperativa y el reglamento de la presente ley.

Sin embargo, serán aplicables a los socios personas naturales y a las cooperativas, según corresponda, los artículos 14, con excepción de su inciso primero, 15, 17 y 158, y los Títulos I, II y III del Libro II del Código del Trabajo.

Los conflictos que se susciten con ocasión de estos actos y las prestaciones a que ellos dieren lugar, serán de conocimiento de los juzgados de letras del trabajo, conforme al procedimiento establecido en el Capítulo II del Título I del Libro V del Código del Trabajo.

Los estatutos deberán regular la forma de determinar la naturaleza de los servicios que deberán prestar los socios personas naturales, el lugar o ciudad en que hayan de prestarse, la duración y distribución de la jornada de trabajo, el trabajo en horas extraordinarias, el descanso dentro de la jornada, el descanso semanal, el feriado anual y las prestaciones a que tenga derecho el socio que se retire o sea excluido."

82.- Derógase el artículo 78.

83.- Derógase el artículo 79.

84.- En el artículo 80:

a) Intercálase, después de la palabra "Renta," la frase "en la forma que establece el artículo 17, Nº 5, del decreto ley Nº 824, de 1975".

b) Sustitúyese en el inciso segundo, la expresión "reglamento interno" por "estatuto" y agrégase, a continuación, reemplazando el punto final (.) por la conjunción "y", la expresión "aquellos a que se refiere el inciso primero del artículo 76."

85.- Reemplázase el artículo 81, por el siguiente:

"Artículo 81.- Son cooperativas agrícolas y campesinas las que se dedican a la compraventa, distribución, producción y transformación de bienes, productos y servicios, relacionados con la actividad silvoagropecuaria, con el objeto de procurar un mayor rendimiento de ella y que actúan preferentemente en un medio rural y propenden al desarrollo social, económico y cultural de sus socios."

86.- Reemplázase el artículo 82, por el siguiente:

"Artículo 82.- Son cooperativas pesqueras aquellas que se dedican a la producción, compra, venta, distribución, transformación de bienes, productos y servicios relacionados con la explotación de productos del mar y a las actividades que persigan el mejoramiento de las condiciones de vida de quienes las desempeñan.

Las cooperativas pesqueras formadas por pescadores artesanales, tendrán acceso a todos los beneficios que señala la Ley General de Pesca y Acuicultura, para las organizaciones de pescadores artesanales legalmente constituidas."

87.- Derógase el artículo 83.

88.- Derógase el artículo 84.

89.- Derógase el artículo 85.

90.- Derógase el artículo 86.

91.- Derógase el artículo 87.

92.- Sustitúyese el artículo 88 por el siguiente:

"Artículo 88.- Sólo podrán pertenecer a las cooperativas campesinas los productores agrícolas que exploten personalmente, a cualquier título, una pequeña propiedad rústica, los miembros de las comunidades campesinas e indígenas, los medieros y los trabajadores agrícolas permanentes o de temporada, incluso aquellos que desempeñen labores administrativas.

Podrán también ser socios de las cooperativas campesinas las personas jurídicas de derecho público y las de derecho privado que no persiguen fines de lucro y las personas naturales o jurídicas, propietarias, usufructuarias o arrendatarias de los predios en que dichas cooperativas desarrollen sus actividades."

93.- Derógase el artículo 89.

94.- Derógase el artículo 90.

95.- Derógase el artículo 91.

96.- Reemplázase el artículo 92, por el siguiente:

"Artículo 92.- Son cooperativas de servicio las que tengan por objeto distribuir los bienes y proporcionar servicios de toda índole, preferentemente a sus socios, con el propósito de mejorar sus condiciones ambientales y económicas y de satisfacer sus necesidades familiares, sociales, ocupacionales o culturales.

Sin que la enumeración siguiente sea taxativa, las cooperativas de esta clase podrán tener el carácter de escolares, de abastecimiento y distribución de energía eléctrica y de agua potable, de vivienda, de seguros, de aprovisionamiento, de ahorro y crédito y también de beneficio para las actividades del hogar y de la comunidad."

97.- Intercálase, después del artículo 92, el subtítulo siguiente, nuevo:

"1) De las Cooperativas Escolares".

98.- Sustitúyense, en el artículo 93, la palabra "primaria" por "básica" y las palabras "las escuelas en las" por "los establecimientos en los".

99.- Sustitúyese en el inciso final del artículo 94, las palabras "a las ventas y servicios" por "al valor agregado".

100.- Intercálase, después del artículo 95, el subtítulo siguiente, nuevo:

"2) De las Cooperativas de Abastecimiento y Distribución de Energía Eléctrica y de Agua Potable".

101.- Sustitúyese el artículo 96, por el siguiente:

"Artículo 96.- Las cooperativas de abastecimiento y distribución de energía eléctrica podrán distribuir energía eléctrica a sus socios, incluso en zonas de concesión de servicio eléctrico de distribución correspondientes a otras sociedades, siempre que hayan ingresado a la entidad con anterioridad al otorgamiento de la concesión.

Las mencionadas cooperativas podrán distribuir energía eléctrica a quienes no tengan la calidad de socios, fuera de zonas de concesión.

Las referidas cooperativas podrán usar bienes nacionales de uso público para el tendido de líneas aéreas y subterráneas destinadas a la distribución de electricidad, previa obtención de los permisos correspondientes.

Lo señalado en este artículo es sin perjuicio de lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1982, del Ministerio de Minería."

102.- Reemplázase el artículo 97 por el siguiente:

"Artículo 97.- Las cooperativas de abastecimiento y distribución de agua potable se registrarán en lo que fuere aplicable, por las disposiciones del artículo anterior, sin perjuicio de las que dispongan las leyes especiales que regulan esta actividad."

103.- Intercálanse, después del artículo 97, los subtítulos siguientes:

"3) De las Cooperativas de Vivienda.

a) Disposiciones Generales".

104.- Derógase el artículo 98.

105.- Sustitúyese el artículo 99 por el siguiente:

"Artículo 99.- Son cooperativas de vivienda aquellas que tienen por objeto satisfacer las necesidades habitacionales y comunitarias de sus socios y prestar los servicios inherentes a dicho objetivo.

Habrán dos clases de cooperativas de vivienda:

1) Las cooperativas cerradas de vivienda cuyo conjunto habitacional deberá constituir una unidad territorial orgánica, y

2) Las cooperativas abiertas de vivienda, que pueden desarrollar en forma permanente, simultánea o sucesiva diferentes programas habitacionales y tener carácter nacional o bien desarrollar una acción regional.

Su patrimonio pagado no podrá ser inferior al equivalente a 2.000 unidades de fomento para las de carácter regional y a 7.000 unidades de fomento para las de nivel nacional. Tendrán un número ilimitado de socios, a partir de un mínimo de 200 para las regionales y de 300 para las nacionales. Su duración será indefinida, sin perjuicio de lo que prescriban los textos legales y reglamentarios y los estatutos sociales en cuanto a su disolución.

El reglamento que se dicte establecerá el procedimiento para regular la información que deberá entregarse a los socios respecto del funcionamiento de

las asambleas de programas, los procedimientos para acordar el loteo y la construcción y financiamiento para la adquisición de las viviendas y respecto de los aportes, exenciones tributarias que beneficien a los socios o a la cooperativa y otras materias que se consideren necesarias."

106.- Sustitúyese el artículo 100, por el siguiente:

"Artículo 100.- Se podrá autorizar la constitución de cooperativas de servicios habitacionales, cuyos socios sean dueños de terrenos ubicados en una misma comuna y conserven la propiedad de éstos, que persigan como objetivo la construcción o terminación de sus viviendas, la finalización de la urbanización o el establecimiento de servicios comunitarios. Estas entidades se registrarán por las normas aplicables a las cooperativas cerradas de vivienda."

107.- Sustitúyese el artículo 101, por el siguiente:

"Artículo 101.- La enajenación de las cuotas de capital de las cooperativas de vivienda deberá ser previamente aprobada por el consejo de administración, debiendo efectuarse mediante instrumento privado autorizado ante notario, en el que deberá constar la fecha de la sesión del consejo que la haya aprobado.

No será aplicable a la cesión de derechos que se efectúe entre cónyuges, a título de compraventa, la sanción establecida en el artículo 1796 del Código Civil. Sin embargo, la enajenación será inoponible a los acreedores del cedente que tuvieren créditos anteriores a la cesión."

108.- Sustitúyese el artículo 102, por el siguiente:

"Artículo 102.- El consejo de administración de las cooperativas de vivienda, a petición de cualquier socio interesado, le adjudicará en dominio la vivienda construida que tenga asignada en uso y goce o que le corresponda, una vez que se haya cumplido con las exigencias de urbanización.

Sin embargo, las cooperativas podrán conservar la propiedad de sus viviendas cuando el acreedor hipotecario que otorgó los créditos para construirlas así lo exija, de lo que se dejará constancia expresa en la escritura de mutuo respectiva. La prohibición de adjudicar las viviendas deberá ser inscrita en el Registro de Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces respectivo. Una vez pagado el mutuo hipotecario los socios tendrán el derecho establecido en el inciso primero."

109.- Derógase el artículo 104.

110.- Sustitúyese el artículo 105 por el siguiente:

"Artículo 105.- Una vez que se asigne en uso y goce las viviendas a los socios, si su edificación o la ejecución de las obras de urbanización, hubiere sido

financiada con un mutuo hipotecario, deberá dividirse el préstamo y la garantía hipotecaria entre los diversos inmuebles asignado a cada socio, el que responderá por la cuota correspondiente a dicho inmueble. Para estos efectos, el consejo de administración de la cooperativa representará legalmente a sus socios.

Los socios pagarán directamente al acreedor hipotecario sus dividendos a menos que se haya pactado otra cosa.

En caso de atraso en el pago del dividendo y siempre que dicho atraso exceda de 60 días, podrá el acreedor perseguir judicialmente la responsabilidad del socio. La garantía hipotecaria sólo podrá hacerse efectiva sobre el inmueble asignado al socio respectivo, aun cuando no se haya otorgado la recepción definitiva de la urbanización."

111.- Derógase el artículo 106.

112.- Sustitúyese el artículo 107, por el siguiente:

"Artículo 107.- Los socios a quienes se haya asignado una vivienda, tendrán derecho al uso y goce personal de la misma o a su arriendo en casos calificados, de acuerdo con las condiciones que establezcan los estatutos y el reglamento.

Los asignatarios o sus herederos, con sus obligaciones pecuniarias al día respecto de las cooperativas, que estén en uso y goce de una vivienda y que dejen de tener la calidad de socios, no perderán sus derechos sobre la misma."

113.- Intercálase después del artículo 107 el subtítulo siguiente:

"b) De las Cooperativas Cerradas de Vivienda".

114.- Reemplázase el artículo 108, por el siguiente:

"Artículo 108.- Los terrenos adquiridos por las cooperativas de vivienda a título gratuito, se considerarán mayor capital para los efectos de su adjudicación a los socios."

115.- Sustitúyese el artículo 109, por el siguiente:

"Artículo 109.- Para la adquisición a título oneroso de terrenos por una cooperativa de vivienda se deberá contar con un informe técnico favorable relativo a la factibilidad del loteo y la urbanización, de la dirección de obras o la unidad que ejerza sus funciones, de la municipalidad correspondiente a la ubicación del inmueble.

El informe deberá ser emitido dentro del plazo de 60 días, contado desde la fecha de presentación de la solicitud con los certificados que sean necesarios.

El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo podrá autorizar a los institutos a que se refiere el artículo 125, que emitan el informe técnico antes mencionado, siempre que se ciñan a las normas que el citado Ministerio les imparta.

El acto o contrato que se celebre sin el informe técnico favorable a que se refiere este artículo adolecerá de nulidad relativa.

Los notarios no autorizarán escrituras ni los conservadores procederán a inscribirlas si no se inserta en ellas el correspondiente informe."

116.- Sustitúyese el artículo 110, por el siguiente:

"Artículo 110.- El remanente que obtengan las cooperativas cerradas de vivienda no podrá destinarse a la formación de fondos de reserva. Su excedente deberá ser íntegramente capitalizado y se reflejará en un aumento proporcional del valor de las cuotas de capital."

117.- Después del artículo 110 agrégase el subtítulo siguiente:

"c) De las Cooperativas Abiertas de Vivienda".

118.- Sustitúyese el artículo 111, por el siguiente:

"Artículo 111.- Las cooperativas abiertas de vivienda deberán formar una asamblea por cada programa habitacional, al cual pertenecerán los socios, personas naturales, incorporados al mismo, debiendo asimismo constituirse una asamblea con todos los socios ahorrantes, personas naturales que no estén inscritos en ningún programa.

Cada programa habitacional deberá tener un número limitado de socios y durará hasta que se efectúe una liquidación completa del mismo, una vez transferido el dominio de las viviendas a los socios. No obstante, los socios podrán continuar con el programa habitacional y la asamblea respectiva después de la liquidación, cuando así lo hayan decidido al incorporarse al mismo.

Cada vez que se cite a una junta general de socios, deberá convocarse, con a lo menos 30 días de anticipación, a las asambleas locales para tratar las materias que serán consideradas en la junta y proceder a las elecciones que correspondan.

Cada asamblea deberá elegir un consejo local, cuya composición y atribuciones se fijarán en los estatutos. Los consejeros locales representarán a los socios de sus respectivas asambleas en las juntas generales de socios, de acuerdo al número de socios inscritos en los programas respectivos que hayan asistido a la asamblea correspondiente.

La enajenación de los bienes raíces asignados a una Asamblea de Programa y la constitución de derechos reales distintos al del dominio de los mismos, sólo podrá ser aprobada por el Consejo de Administración, el que no podrá delegar esta facultad, siempre y cuando estos se hayan destinado, de acuerdo al plano de loteo respectivo, a esparcimiento, recreación, reunión o desarrollo cultural de los integrantes del programa habitacional de que se trate.

Las cooperativas abiertas de vivienda de carácter nacional podrán contemplar en sus estatutos asambleas regionales, a las cuales deberán asistir los consejeros locales. Sin perjuicio de las atribuciones que les confieran los estatutos y el reglamento, les corresponderá elegir un consejo regional, cuyos miembros en ejercicio representarán a los socios inscritos en las asambleas de la región respectiva, de acuerdo a lo señalado en el inciso tercero.

Las cooperativas abiertas de vivienda que tengan un máximo de 300 socios y las que tengan un solo programa habitacional, podrán celebrar sus juntas generales con la asistencia de sus socios, conforme a las normas generales."

119.- Agrégase a continuación del artículo 111 el siguiente artículo 111 bis:

"Artículo 111 bis.- En caso de liquidación, una vez pagadas las deudas y reembolsado el valor de las cuotas de capital debidamente revalorizado, en el mismo orden, los fondos de reserva y cualesquiera otros excedentes resultantes deberán ser destinados por los estatutos o, en su defecto, por la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción, a una de las instituciones regidas por el Capítulo III de la presente ley."

120.- Intercálase después del artículo 111 bis el subtítulo siguiente, nuevo:

"4) De las Cooperativas de Ahorro y Crédito".

121.- En el artículo 112:

a) Sustitúyese en el párrafo primero, después de la palabra "ahorros", la conjunción "y" por una coma (,).

b) Reemplázase en el párrafo primero las palabras "a sus socios, reajustables" y la totalidad del párrafo segundo, por "y prestar otros servicios financieros a sus socios, de conformidad a la legislación vigente. Estas cooperativas podrán asimismo recibir depósitos de personas que sean o no socios, de acuerdo a la reglamentación vigente."

122.- Agrégase el siguiente artículo 112 bis:

"Artículo 112 bis.- Las cooperativas de ahorro y crédito cuyos activos excedan las 50.000 unidades de fomento, quedarán sometidas a la fiscalización y control de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, respecto de las operaciones económicas que realicen en cumplimiento de su objeto."

123.- Sustitúyese el artículo 114, por el siguiente:

"Artículo 114.- Su patrimonio pagado no podrá ser inferior a 1.000 unidades de fomento, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 25."

124.- Sustitúyese el artículo 115, por el siguiente:

"Artículo 115.- Las cooperativas de ahorro y crédito, además de los órganos de administración que indica el artículo 38, deberán contar con un comité de crédito, cuyos miembros serán designados por el consejo de administración.

Estas cooperativas estarán obligadas a fijar su política general de créditos en un reglamento interno, que deberá ser aprobado por el Departamento de Cooperativas."

125.- Derógase el artículo 116.

126.- Derógase el artículo 117.

127.- Sustitúyese el artículo 118, por el siguiente:

"Artículo 118.- Son cooperativas de consumo las que tienen por objeto suministrar a los socios y sus familias artículos y mercaderías de alimentación, vestuario y objetos de uso personal o doméstico o cualesquiera otros de circulación lícita, con el objeto de mejorar sus condiciones económicas.

Las cooperativas de consumo deben constituirse con 100 socios, a lo menos."

128.- Derógase el artículo 119.

129.- Elimínase el inciso primero del artículo 120, pasando el actual inciso segundo a ser inciso único.

130.- Sustitúyese, en el artículo 121, el guarismo "6" por "118".

131.- Sustitúyese la denominación del Capítulo III "De las Confederaciones, Uniones, Federaciones y Sociedades Auxiliares", por "De las Confederaciones, Federaciones e Institutos Auxiliares."

132.- En el artículo 122:

1. Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

"Las federaciones de cooperativas estarán constituidas por tres o más cooperativas, las confederaciones por cinco o más federaciones y los institutos auxiliares por siete o más personas jurídicas de derecho público, cooperativas u otras personas jurídicas de derecho privado que no persiguen fines de lucro."

2. a) Sustitúyese en el inciso segundo el término "uniones" por "confederaciones".

b) Intercálase en el inciso segundo, después de las palabras "público o", los términos "de derecho" y elimínase la frase "de acuerdo con su objeto".

133.- Sustitúyese el artículo 123, por el siguiente:

"Artículo 123.- Las federaciones, confederaciones e institutos auxiliares, serán considerados como cooperativas para todos los efectos legales y reglamentarios."

134.- Sustitúyese el artículo 124, por el siguiente:

"Artículo 124.- A las federaciones y confederaciones les corresponderá velar por los intereses y complementar y facilitar el cumplimiento de los objetivos de las cooperativas, cooperando con su labor y realizando cualesquiera actividad de producción de bienes o de prestación de servicios que se señale en sus estatutos, con dicho objeto."

135.- Sustitúyese el artículo 125, por el siguiente:

"Artículo 125.- Son institutos auxiliares aquellos destinados a proporcionar servicios de asesoría, técnicos, educacionales, económicos, operacionales, de auditoría y administrativos preferentemente a las cooperativas, federaciones, confederaciones, grupos precooperativos y a otros institutos auxiliares, pudiendo asimismo participar en la organización de industrias y servicio de cualquiera naturaleza, en beneficio de las cooperativas y de los socios de éstas."

136.- Sustitúyese el artículo 126, por el siguiente:

"Artículo 126.- Las instituciones a que se refiere éste título podrán desempeñar cualesquiera servicios de auditoría y de inspección técnica, económica, operacional y administrativa, con respecto a las cooperativas, en aquellos casos en que éstas se lo soliciten o el Departamento de Cooperativas se los encomiende."

Para el logro de sus finalidades, estas instituciones podrán operar directamente o crear entidades en que pueden participar además personas jurídicas, que de acuerdo a sus estatutos no persigan fines de lucro."

137.- Sustitúyese el artículo 127, por el siguiente:

"Artículo 127.- Los estatutos de las federaciones, confederaciones e institutos auxiliares podrán establecer que las entidades cooperativas que sean socias de las mismas tendrán un número de votos en las juntas generales proporcional al número de sus afiliados, directos o indirectos, sin que ninguna de estas entidades pueda tener más de 3 ni menos de un voto."

138.- Sustitúyese el artículo 128, por el siguiente:

"Artículo 128.- Será aplicable a las entidades a que se refiere este título, que tengan diez socios o menos, lo dispuesto en el artículo 68 bis."

139.- Derógase el artículo 129.

140.- Derógase el artículo 130.

141.- Derógase el artículo 131.

142.- Sustitúyese el artículo 132, por el siguiente:

"Artículo 132.- El Departamento de Cooperativas tendrá a su cargo la aplicación de la presente ley y le corresponderá la normalización, la fiscalización de las cooperativas y la promoción de programas y actividades orientadas al desarrollo de la gestión y capacidad empresarial de aquéllas, siendo sus atribuciones las siguientes:

a) Interpretar administrativamente la presente ley, su reglamento, los estatutos y las demás normas que rigen a las cooperativas;

b) Examinar todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y documentos de las cooperativas y requerir de ellas o de los miembros de sus consejos de administración, comisiones liquidadoras, juntas de vigilancia, gerentes, liquidadores, socios administradores a que se refiere el inciso primero del artículo 68 bis, inspectores de cuentas, contadores, auditores, personal o asesores, los antecedentes y explicaciones que juzgue necesarios para su información. Para el ejercicio de esta facultad podrá realizar visitas inspectivas y podrá asimismo solicitar a la cooperativa la entrega de cualquier documento, libro o antecedente que sea necesario para fines de fiscalización.

Podrá pedir la confección y presentación de balances y estados financieros en las fechas que estime convenientes para comprobar la exactitud e inversión de los capitales y fondos.

Salvo las excepciones autorizadas por el Departamento de Cooperativas, todos los libros, archivos y documentos de las cooperativas deben estar permanentemente disponibles para su examen en la sede social;

c) Fijar normas e impartir instrucciones de carácter contable y administrativo para perfeccionar el funcionamiento de las cooperativas, pudiendo establecer sistemas de contabilidad simplificada para determinadas clases de cooperativas, atendidas las necesidades de funcionamiento, el bajo número de socios, el exiguo capital o el bajo volumen de sus operaciones;

d) Requerir de las cooperativas que proporcionen, por las vías que el Departamento de Cooperativas señale, información a los socios y al público sobre su situación jurídica, económica, financiera y patrimonial;

e) Convocar u ordenar convocar a junta general. En aquellos casos en que el consejo de administración, su presidente, la comisión liquidadora, el liquidador o el gerente, en su caso, no den cumplimiento oportuno a las instrucciones que se les imparta de citar a una junta general.

Podrá, asimismo, suspender la convocatoria a junta general o la celebración de la misma, si se hubiere convocado o se estuviere celebrando con contravención a las leyes, reglamentos, estatutos, normas aplicables o instrucciones emanadas del Departamento de Cooperativas;

f) Dictar normas relativas a la confección y conservación de las actas, libros y documentos que el Departamento de Cooperativas determine y requerir, en su caso, que en ellos se deje testimonio o se inserten, parcial o íntegramente, sus comunicaciones;

g) Solicitar informes, verbales o escritos, a los consejeros, gerentes, contadores, auditores, asesores, trabajadores, inspectores de cuentas, liquidadores, a los socios administradores a que se refiere el inciso primero del artículo 68 bis, y a los miembros de la junta de vigilancia, de la comisión liquidadora y del comité organizador de las cooperativas y a toda otra persona que hubiere ejecutado o celebrado con ellas actos o convenciones de cualquier naturaleza respecto de algún hecho cuyo conocimiento estime necesario para el cumplimiento de sus funciones;

h) Hacerse representar en la junta general de socios o en las sesiones del consejo de administración cuando lo estime conveniente;

i) Ordenar la designación de auditores externos.

El Departamento de Cooperativas podrá fijar los requisitos que éstos deben reunir para el cumplimiento de su cometido, atendidas las características de las entidades fiscalizadas;

j) Impartir a los auditores externos, a las juntas de vigilancia y a los inspectores de cuentas, normas sobre el contenido de los dictámenes que deban emitir;

k) Llevar un registro que deberá contener a todas las cooperativas con expresión de los datos relativos a su constitución, modificaciones estatutarias, disolución, domicilio, representantes legales y mandatarios.

Este Registro estará a disposición del público en el Departamento de Cooperativas;

l) Dictar las normas que deban observarse en las liquidaciones de las cooperativas e impartir instrucciones a los miembros de sus comisiones liquidadoras y a sus liquidadores;

ll) Representar al consejo de administración, al gerente, a los socios administradores a que se refiere el inciso primero del artículo 68 bis, a las comisiones liquidadoras y a los liquidadores, las infracciones a la presente ley, su reglamento, estatutos, instrucciones del Departamento de Cooperativas y demás normas que les sean aplicables;

m) Objetar, suspender o prohibir la ejecución de cualquier acuerdo de las juntas generales, consejo de administración o comisiones liquidadoras contrarios a la ley, su reglamento, estatutos, instrucciones del Departamento de Cooperativas y demás normas que les sean aplicables.

Podrá también revalidar los acuerdos cuando adolecieren de vicios producidos por defectos de tramitación y sean indispensables para el correcto funcionamiento de la cooperativa.

Las resoluciones sobre la materia deberán ser fundadas y puestas en conocimiento del consejo o de la comisión liquidadora. Estos deberán ponerlas en conocimiento de los socios y de los terceros afectados, si los hubiere;

n) Instruir a los organizadores de cooperativas que no llegaren a constituirse legalmente que restituyan todas las sumas o aportes que hubieren recibido, y

ñ) Ejercer las demás facultades que ésta u otras leyes le confieran."

143.- Intercálase el siguiente artículo 132 bis:

"Artículo 132 bis.- Los funcionarios del Departamento de Cooperativas estarán obligados a guardar reserva acerca de los documentos y antecedentes de las cooperativas, siempre que tales documentos no tengan el carácter de públicos ni se trate de requerimientos de algún Poder del Estado.

Lo anterior no obstará a que el Jefe del Departamento de Cooperativas pueda difundir o hacer difundir por las personas y medios que determine, la información o documentos relativos a las cooperativas con el fin de velar por la fe pública o por el interés de los socios, pudiendo asimismo proporcionar antecedentes generales o particulares que permitan la confección de informes estadísticos, estudios e investigaciones sobre las cooperativas, siempre que no se trate de antecedentes comerciales o de otra índole, que por su naturaleza tengan el carácter de secretos.

El personal del Departamento de Cooperativas no podrá prestar servicios profesionales a las cooperativas."

144.- Sustitúyese el artículo 133, por el siguiente:

"Artículo 133.- Las resoluciones o actos del Departamento de Cooperativas serán reclamables ante el juzgado de letras del domicilio del requirente, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción o publicación de la resolución respectiva, según el caso, o a la realización del acto impugnado.

El tribunal resolverá breve y sumariamente, con audiencia del Departamento de Cooperativas para lo cual deberán emplazarlo, a fin de que si lo estima pertinente evacue su informe dentro del plazo de 15 días más el aumento que corresponda de acuerdo a la tabla de emplazamiento para contestar demandas. Junto con su informe, deberá remitir al tribunal todos los antecedentes que obren en su poder y que estén relacionados con la materia reclamada.

El tribunal podrá decretar todas las diligencias que estime necesarias para el mejor esclarecimiento del litigio.

La sentencia que rechace el reclamo, será apelable en el solo efecto devolutivo."

145.- Sustitúyese el artículo 134, por el siguiente:

"Artículo 134.- Las entidades que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley tengan el carácter de uniones de cooperativas, se tendrán por el solo ministerio de la ley, por federaciones, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley."

146.- Derógase el artículo 135.

147.- Derógase el artículo 136.

148.- Sustitúyese el artículo 137, por el siguiente:

"Artículo 137.- A las entidades cooperativas que tengan, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, el carácter de cooperativas especiales o agrícolas o de

abastecimiento de energía eléctrica se les continuará aplicando el decreto ley N° 3.351, de 1980, sin perjuicio de la aplicación supletoria de esta ley.

Las cooperativas agrícolas o de abastecimiento de energía eléctrica, podrán transformarse en especiales, de las regidas por el decreto ley N° 3.351, de 1980.

Lo expuesto no obsta a que las referidas cooperativas reformen sus estatutos con el objeto de quedar íntegramente sometidas a la presente ley."

149.- Sustitúyese el artículo 138, por el siguiente:

"Artículo 138.- Deróganse las siguientes disposiciones legales y reglamentarias:

La ley N° 5.588; el título V de la ley N° 5.604; el decreto ley N° 1.320, de 1976; el decreto con fuerza de ley N° 13, de 1968, del Ministerio de Agricultura; el decreto supremo N° 595, de 1932, del Ministerio del Trabajo; el decreto supremo N° 85, del Ministerio del Trabajo; el decreto supremo N° 2.380, de 1948, del ex Ministerio de Obras Públicas y Vías de Comunicación; el decreto supremo N° 250, de 1958, del Ministerio de Agricultura; el decreto supremo N° 1.044, de 1965, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; el decreto supremo N° 497, de 1967, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y el decreto supremo N° 1.230, de 1969, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción."

150.- Agréganse los siguientes artículos nuevos:

"Artículo 139.- La junta general de socios deberá aprobar previamente toda adquisición, a título oneroso, de cuotas de capital, acciones o derechos sociales de cualesquiera cooperativa o sociedad, en virtud de la cual llegue a tener invertido en una de éstas a lo menos el 10% de su propio patrimonio.

Artículo 140.- Las operaciones entre las cooperativas y las personas jurídicas señaladas en el artículo precedente deberán observar condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado. Los administradores de unas y otras serán responsables de las pérdidas o perjuicios que pudieren causar a la entidad que administren por operaciones hechas con infracción a este artículo.

Lo dispuesto en el inciso precedente será también aplicable a las operaciones que realicen entre sí, las sociedades o cooperativas, cuyo capital social pertenezca en, al menos, un 50% a la misma cooperativa.

Artículo 141.- El Departamento de Cooperativas podrá examinar todos los libros, cuentas, archivos y documentos de las sociedades que pertenezcan en, al menos, un 30% a una cooperativa, para verificar que se haya dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 142 y 143.

Artículo 142.- Los miembros, titulares y suplentes, del consejo de administración, la junta de vigilancia y la comisión liquidadora, los inspectores de cuentas, el gerente y los socios administradores referidos en el inciso primero del artículo 68 bis, y los liquidadores de las cooperativas que sean propietarias de, a lo menos, el 30% del capital social de una cooperativa o sociedad, podrán asistir con derecho a voz a las reuniones de los consejos de administración, directorios o administradores de estas entidades y tendrán, además, el derecho de examinar sus libros y antecedentes.

Artículo 143.- Las cooperativas constituidas en el extranjero podrán operar en el territorio nacional si observan los principios cooperativos y requisitos incorporados en esta ley, se ajustan a las leyes chilenas y no contrarían las buenas costumbres o el orden público, de conformidad a las normas que establezca el reglamento.

La objeción a su operación en el territorio nacional, si faltare cumplir alguno de los requisitos establecidos en esta ley o en su reglamento, se regirá por lo dispuesto en el artículo 14.

Artículo 144.- Serán aplicables los artículos 2 y 16 a las cooperativas extranjeras que tengan el mismo objeto de las entidades señaladas en esas disposiciones.

Artículo 145.- El Departamento de Cooperativas podrá prohibir que las cooperativas extranjeras que incurran en alguna de las causales señaladas en la letra c) del artículo 50, realicen operaciones en el país, por una resolución fundada, cuyo extracto deberá ser publicado en el Diario Oficial.

Artículo 146.- Serán también aplicables a las cooperativas extranjeras, cuando proceda, aquellas disposiciones especiales que regulan las actividades propias de otros tipos de cooperativas."

151.- Sustitúyese el actual capítulo final "Artículos Transitorios" por el siguiente:

"DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO 1º.- Se continuará aplicando con respecto a las cooperativas de colonización agrícola, agropecuarias de reforma agraria y de reforma agraria, que hayan sido disueltas, voluntaria o forzadamente, con anterioridad a la publicación en el Diario Oficial de la ley N° 18.755, la letra d) de su artículo 2º transitorio.

ARTICULO 2º.- El Departamento de Cooperativas podrá omitir la emisión de un pronunciamiento con respecto a los estudios socioeconómicos que se hayan presentado antes de la entrada en vigencia de esta ley, que correspondan a cooperativas que no lo requieran en virtud de sus nuevas disposiciones.

Las cooperativas en formación, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, respecto de las cuales no se haya dictado el decreto o resolución que autorice su existencia, se ceñirán al procedimiento de constitución establecido en las nuevas disposiciones.

ARTICULO 3º.- El Departamento de Cooperativas podrá ejercer las facultades que contempla el inciso segundo del artículo 53 de la Ley General de Cooperativas, respecto de las cooperativas que hayan sido disueltas forzosamente antes de la vigencia de esta ley y cuya junta general de socios no haya designado a su comisión liquidadora.

ARTICULO 4º.- Las cooperativas abiertas de vivienda actualmente existentes deberán enterar el patrimonio exigido en el plazo de un año contado desde la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial, para tener una acción regional.

Las de ahorro y crédito que tuvieren un patrimonio inferior al establecido en la presente ley, deberán enterarlo en el plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial.

ARTICULO 5º.- Las cooperativas de vivienda que hayan obtenido créditos hipotecarios con anterioridad a la publicación de esta ley y que no hayan pagado íntegramente su deuda, requerirán el previo consentimiento expreso del acreedor hipotecario para adjudicar en dominio las viviendas a sus socios.

ARTICULO 6º.- Los valores acumulados en fondos de reserva, que en conformidad a las disposiciones de esta ley tenían el carácter de irrepartibles durante la vigencia de la cooperativa, mantendrán dicho carácter, hasta concurrencia del monto expresado en el balance correspondiente al cierre del ejercicio anterior a la fecha de publicación de la presente ley.

ARTICULO 7º.- Durante el tiempo en que una cooperativa de vivienda tenga saldo deudor de préstamos que le hayan sido concedidos, deberá constituir un fondo de responsabilidad equivalente al 5% de los dividendos correspondientes a esos préstamos. Pasarán a fondo de responsabilidad los sobrantes de los fondos cuya finalidad se haya cumplido íntegramente durante el ejercicio.

El fondo de responsabilidad se incrementará hasta que alcance un 20% del saldo de dividendos por pagar. Los últimos dividendos se podrán pagar con cargo a dicho fondo. En todo caso, se aplicará con respecto a ese fondo lo dispuesto en el artículo 37 bis."

Artículo 2º.- Facúltase al Presidente de la República para dictar un texto definitivo, actualizado y refundido de la Ley General de Cooperativas, sistematizado, coordinado y dando una nueva numeración correlativa a su articulado, en conformidad con las reformas introducidas por esta ley y con las que anteriormente se le hubieren hecho."

- - -

Acordado en sesiones celebradas los días 8, 15 y 22 de junio, y 20 de julio de 1999, con asistencia de sus miembros, HH. Senadores señor Enrique Zurita Camps (Presidente), señora Evelyn Matthei Fornet (Presidenta accidental), y señores Jorge Lavandero Illanes (Sergio Páez Verdugo), Jovino Novoa Vásquez y Jorge Pizarro Soto.

Sala de la Comisión, a de 21 de julio de 1999.

Roberto Bustos Latorre
Secretario

INDICE

	Páginas
Aspectos de orden general	1
Antecedentes	2

Discusión	6
Decisión sobre la discusión	23
Texto del Proyecto de Ley	23
Asistencia	61

RESEÑA

I. BOLETIN Nº: 855-03

II. MATERIA: Proyecto de ley que modifica la Ley General de Cooperativas.

III. ORIGEN: Mensaje.

IV. TRAMITE CONSTITUCIONAL: Segundo trámite.

V. APROBACION POR LA CAMARA DE DIPUTADOS: Unánime.

VI. INICIO TRAMITACION EN EL SENADO: 6 de abril de 1999.

VII. TRAMITE REGLAMENTARIO: Primer informe.

VIII. URGENCIA: No tiene.

IX. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

- Ley General de Cooperativas, cuyo texto refundido se contiene en el decreto supremo N° 502, de 1978, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Decreto Ley N° 1.320, de 1976, sobre cooperativas de vivienda; Ley N° 19.019, que modifica el D.L. N° 1.320; Decreto con Fuerza de Ley N° 12, de 1968, que establece normas sobre constitución, funcionamiento y administración de cooperativas de reforma agraria; Decreto con Fuerza de Ley N° 13, de 1968, sobre cooperativas campesinas; Ley N° 4.531, sobre cooperativas agrícolas; Ley N° 18.023, que establece obligaciones para las sociedades de cooperación agrícola; Decreto Supremo N° 497, de 1967, del Ministerio de Economía, que aprueba el Reglamento de Cooperativas de Productores de la Pequeña Minería, y Decreto Supremo N° 250, que aprueba el Reglamento definitivo para el funcionamiento de las Cooperativas Vitivinícolas.

X. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISION: Consta de dos artículos permanentes, el primero de los cuales contiene 151 numerales.

XI. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISION:

Modificar los procedimientos para la constitución, reforma de estatutos y disolución de las cooperativas a las fórmulas generales, que con ciertas similitudes se aplican en la actualidad al resto de las personas jurídicas; tender a la eliminación de disposiciones entrabantes o limitantes, dejando que la aplicación de los principios cooperativos sea llevada a la práctica por los socios de las entidades conforme a la realidad específica de cada organización, y concentrar en la Ley General de Cooperativas toda la legislación dispersa en diversos cuerpos normativos.

XII. NORMAS DE QUORUM ESPECIAL: Los artículos 65, 77 y 133, contenidos en los numerales 67, 81 y 144, respectivamente, del artículo 1º, son de rango orgánico constitucional.

XIII. ACUERDOS: Aprobación general unánime (4 X 0).

Valparaíso, 21 de julio de 1999.

ROBERTO BUSTOS LATORRE
Secretario